

**LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO LOCAL EN UN CONTEXTO DE
PRIVATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD: EL CASO DEL OCCIDENTE DE
BOYACÁ**

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA
BOGOTÁ D.C
2014**

**LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO LOCAL EN UN CONTEXTO DE
PRIVATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD: EL CASO DEL OCCIDENTE DE
BOYACÁ**

JORGE IVÁN HEREDIA HEREDIA

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA
BOGOTÁ D.C
2014**

**LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO LOCAL EN UN CONTEXTO DE
PRIVATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD: EL CASO DEL OCCIDENTE DE
BOYACÁ**

JORGE IVÁN HEREDIA HEREDIA
Trabajo de grado para optar por el título de politólogo

DIRECTOR
FABIÁN ACUÑA VILLARAGA

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y RELACIONES INTERNACIONALES
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA
BOGOTÁ D.C
2014**

Agradecimientos

A mis padres por brindarme la oportunidad de realizar mis estudios universitarios y quienes siempre han estado dándome su apoyo incondicional. A mi hermano por preocuparse y estar pendiente de saber cómo iba la tesis. A mi director de tesis Fabián Acuña que supo acompañarme y brindarme sus conocimientos en este arduo proceso. A los entrevistados que amablemente me ayudaron con la investigación. Y a todas las personas que en ocasiones me dieron algún consejo o me dieron su voz de aliento.

Tabla de contenido

• Introducción.....	1
• Justificación y metodología.....	2
• Objetivos.....	5
Objetivo General.....	5
Objetivos Específicos.....	5
• Capítulo 1. Marco Teórico.....	6
1.1 Sistema Político.....	6
1.2 Privatización de la seguridad.....	12
1.3 Autoritarismos sub-nacionales.....	16
• Capítulo 2. Caracterización del occidente de Boyacá.....	21
2.1 Caracterización socioeconómica.....	21
2.2 Caracterización de la privatización de la seguridad.....	23
• Capítulo 3. Evolución sistema político.....	30
3.1 Relación entre esmeralderos y políticos.....	31
3.1.1 Década del 60.....	31
3.1.2 Década del 70.....	32
3.1.3 Década del 80.....	34
3.2 Competencia electoral e influencia de las elites.....	36
3.2.1 Entre 1988 y 1990.....	38
3.2.2 Después de la firma de los acuerdos de paz hasta el 2000...41	
3.2.3 Después de la reforma de 2003 hasta el 2011.....	45
3.3 Participación en política de familias con poder.....	48
• Conclusiones y recomendaciones.....	49
• Bibliografía.....	53
• Anexos.....	57

Introducción

Esta investigación pretende analizar y describir como ha sido la evolución del sistema político local en medio de un contexto de privatización de seguridad en el occidente de Boyacá. Esta región se caracteriza porque tradicionalmente ha dependido económicamente de la extracción y el comercio de esmeraldas.

Este bien primario ha generado una lucha de poderes entre distintos actores que han intentado obtener el control total de la región. En 1973, el Estado colombiano puso en licitación y adjudicó por primera vez las minas de esmeraldas a particulares para su explotación (Claver, 2011), generando una consolidación del monopolio del negocio de las esmeraldas a familias que desde ese momento fueron reconocidos como empresarios legales. Pero de igual manera hubo otros grupos que no fueron reconocidos como empresarios legales por parte del Estado, intensificándose la lucha entre “legales” e ilegales por obtener el poder.

Se han desarrollado distintas y prolongadas guerras en esta región del país. La tercera guerra verde que se desarrolló en los años 80 fue la más sangrienta de las distintas guerras, para darle fin a este conflicto se firmaron unos acuerdos de paz¹ (ver anexos 2. acuerdos de paz) entre los bandos en disputa con la mediación de la iglesia como garante del proceso pero con la ausencia esencial del Estado. A partir de la firma de los acuerdos de paz, el poder de las familias esmeralderas al interior de la región se intensifica teniendo influencia en distintas instituciones públicas del sistema político. En esta región se ha dado una situación particular, los esmeralderos se convirtieron en los proveedores extra estatales de seguridad obteniendo el control político de los líderes políticos, tienen autonomía frente a las decisiones nacionales y tienen un poder desmedido ya que ningún gobierno ha hecho nada para que el Estado regrese a esta región del país; o posiblemente el Estado no haya tenido intenciones de regresar. Surge la particularidad que en

¹ Monseñor Juan Norberto Forero entregó una copia original de los acuerdos de paz que se firmaron en 1990 para ponerle fin a la guerra verde que duró alrededor de 7 años.

muchas ocasiones el gobierno colombiano ha mediado a favor de los intereses de estas familias permitiendo que logren acaparar más poder y control en la zona.

Justificación y Metodología

Un motivo central para la realización de esta investigación es que en los últimos años se han dado nuevos brotes intensos de violencia en la región lo que ha provocado temor de que vuelvan las guerras del pasado y se ponga en riesgo la estabilidad de la región. Después del atentado contra Pedro Nel Rincón, alias “Pedro Orejas”, donde murió su hijo², la situación del occidente de Boyacá se volvió mediática pero este atentado fue uno más de una serie de crímenes que intentaron revivir la guerra verde. Cabe resaltar que la guerra verde finalizó hace 24 años, estos acuerdos de paz fueron posibles por la intermediación y por la ayuda de la iglesia católica en el proceso. Esta ayuda jerarca contrasta con la ausencia del Estado colombiano quien no hizo parte de este proceso y permitió que unos particulares así como crearon la guerra también le dieran fin. Es ante este nuevo escenario de visibilidad que tiene la región que resulta esencial analizar y conocer un poco más acerca de las dinámicas políticas, sociales y económicas de la región.

Por otra parte, haciendo una revisión de la literatura se encontró que en torno a la privatización de la seguridad los textos académicos que se han escrito se enfocan en el fenómeno paramilitar desconociendo las profundas complejidades que tiene un territorio como el occidente de Boyacá. Algunos de los textos que abordan la privatización de la seguridad son: Mauricio Barón y Francisco Gutiérrez (2006) en un artículo que escriben en un libro titulado *Nuestra Guerra sin Nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*, y el artículo tiene por nombre, *Estado, control territorial y orden político en Colombia. Notas para una economía política del paramilitarismo*. Los autores en este artículo pretenden denotar las

² Murió el hijo de “Pedro Orejas” y 3 personas más. Redacción, B. (11 de noviembre de 2013) “ Atentado a “Pedro Orejas” revive el fantasma de la guerra verde”. El Tiempo. Recuperado el 12 de Octubre de 2014, en el Tiempo. URL: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13176195>

características que ha adoptado el paramilitarismo y como han evolucionado para llegar a proveer seguridad extra- estatal; Mauricio Romero (2003) en *paramilitarismo y autodefensas (1982- 2003)* evidencia como estos grupos se convirtieron en “ empresarios de la coerción” haciendo alusión a la manera en la cual administran, desarrollan y hacen uso de la violencia en las distintas esferas de la vida en las regiones; Ariel Ávila en su artículo *Poder local, estructuras políticas y crimen en Colombia*, enmarca como distintas fuerzas ilegales se han disputado la “soberanía estatal” en los territorios locales y cómo en diversas ocasiones han logrado acaparar el poder en esos territorios.

Como ya se mencionó, la región que esta investigación analizará es el occidente de Boyacá o más conocida como la región esmeraldera del país que comprende los siguientes municipios: Briceño, Coper, Maripi, Muzo, Otanche, Pauna, Quipama y San Pablo de Borbur. Se escogieron estos municipios específicamente porque sus economías giran en torno a las esmeraldas. En algunos de estos municipios se encuentran las minas más productivas del país convirtiéndose en un gran incentivo para las familias controlar estas minas; otros municipios como Briceño y Coper no tienen minas pero los habitantes de estos lugares dependen de este negocio por lo cual se hace esencial tener en cuenta estos municipios. De igual manera, estos municipios eran y son estratégicos territorialmente para los esmeralderos; lo fueron en la guerra verde ya que no solo fue una guerra entre familias, sino también una guerra territorial; y lo son actualmente, porque son paso obligatorio para llegar a Bogotá, Chiquinquirá y/o Puerto Boyacá, lugares en los cuales se comercializan estas gemas.

El periodo de tiempo que se tendrá en cuenta es desde 1988 hasta 2011. Básicamente, la razón para analizar la evolución del sistema político local en este periodo es que en 1988 comienza la elección de alcaldes popularmente mediante comicios electorales. Es así como se hace viable desde este año observar la influencia o incidencia que tuvieron las elites de la región en las elecciones y la

competencia electoral. Este periodo histórico se subdividirá en 3 periodos específicos que permitirán una mayor claridad al momento de analizar la información obtenida. Estos 3 periodos específicos son: i) entre 1988 y 1990, cuando se da la primera elección de alcaldes y se está desarrollando la guerra verde ii) Después de la firma de los acuerdos de la paz verde hasta 2003 iii) Después de la reforma política de 2003 hasta las últimas elecciones transcurridas en el 2011.

Esta investigación utilizó un enfoque cualitativo y es de carácter interpretativo. Por medio de distintas herramientas se obtuvo una significativa recolección de datos. Se utilizaron fuentes primarias, por medio de entrevistas semi-estructuradas se accedió a diferentes autoridades de la zona: dos sacerdotes, se estableció contacto con ellos porque la iglesia fue parte indispensable en la firma de los acuerdos de paz de la guerra verde³; un ex juez municipal⁴; una trabajadora social⁵ y un ex trabajador de Tecminas⁶ (ver anexos 1.1). Con estas entrevistas se realizó una triangulación de información entre las entrevistas, se desarrolló una base de datos electorales de alcaldes y concejales entre 1988 y 2011, archivos de prensa y documentos que otorgaron insumos valiosos al momento de realizar la investigación.

El texto se desarrolla de la siguiente manera: En el primer capítulo correspondiente al marco teórico, se analizan 3 categorías teóricas que sustentan la investigación y son las siguientes: i) Sistema político a nivel general y en lo local; ii) la privatización de la seguridad, y por último, iii) los autoritarismos sub-nacionales que es la

³ Se entrevistó a Monseñor Juan Norberto Forero, quien actualmente es monseñor de la diócesis de Chiquinquirá y al padre Abraham Gil Sierra, actualmente sacerdote del municipio de Sutamarchan, Boyacá. Fueron mediadores de la paz verde y conocen a profundidad la región

⁴ El juez entrevistado es Antonio José Villamil quien durante muchos años fue juez municipal de San Pablo de Borbur, por lo tanto, tiene gran conocimiento de la zona y de sus dinámicas.

⁵ María Florinda Castillo trabajó durante 2 años en el occidente de Boyacá.

⁶ Este ex trabajador de la zona accedió a otorgarnos la entrevista de forma anónima y sin que se grabara su testimonio. Tiene un gran conocimiento de la zona y su testimonio fue de gran relevancia para esta investigación

categorial principal. El capítulo 2 ofrece una caracterización del occidente de Boyacá que se divide en dos partes: i) se hace una caracterización socio-económica de los municipios y ii) se describe como fue el contexto en el cual se dio la privatización de la seguridad en la región por parte de las elites. El capítulo 3 se divide en 3 partes: i) se especifica los vínculos que existen entre los familias esmeralderos y la clase política nacional desde la década de los 60 hasta la década del 80; ii) se observa la competencia electoral en los municipios del occidente de Boyacá entre 1988 y 2011, teniendo en cuenta la influencia de las elites en estos procesos electorales; y iii) se señala la participación directa que han tenido las familias más importantes en los concejos y alcaldías municipales. Finalmente, se dan las conclusiones pertinentes de la investigación

Objetivos

Objetivo General: Analizar la evolución del sistema político local en un contexto o en un ambiente de privatización de la seguridad; en este caso específico el occidente de Boyacá.

Objetivos Específicos

- Presentar las estrategias que utilizaron las elites de la región para lograr privatizar la seguridad en el occidente de Boyacá.
- Analizar la competencia electoral en estos municipios del occidente de Boyacá entre 1988- 2011.
- Indicar la responsabilidad que tiene el Estado colombiano por permitir que el occidente de Boyacá siga siendo una región excluida donde no hay presencia estatal.
- Denotar los vínculos que han tenido tradicionalmente las familias esmeralderas con políticos de alcance nacional.
- Caracterizar la situación social y económica de estos municipios que dependen económicamente de la extracción de esmeraldas.

- Realizar recomendaciones para que estas dinámicas regionales no se sigan prolongando en el tiempo.

Capítulo 1. Marco teórico

El marco teórico tendrá en cuenta las siguientes categorías teóricas: Sistemas políticos (locales), privatización de la seguridad y autoritarismos subnacionales. Teniendo en cuenta estas categorías el marco teórico se desarrollara de la siguiente manera: primero, se definirá el termino de sistema político y posteriormente se hará una caracterización de los sistema políticos locales, haciendo énfasis en el caso colombiano; segundo, se realizara el mismo proceso con el concepto de privatización de la seguridad; finalmente, la definición de estas dos categorías serán esenciales para tener una mayor claridad de la categoría principal que son los autoritarismos sub-nacionales.

1.1 Sistema político

El concepto de sistema político ha sido ampliamente abarcado por una multiplicidad de autores que han pretendido estudiar la importancia y la relevancia que tiene este concepto en la ciencia política. Desde autores como Easton y Almond que han estudiado este concepto de manera general, hasta autores nacionales como Gutiérrez y González que se han enfocado en examinar el sistema político colombiano observando las características y fracturas que este tiene a nivel nacional y local.

David Easton (1969) señala que el sistema político es un conjunto de interacciones políticas. Lo que distingue las interacciones políticas del resto de interacciones sociales es que pretenden la asignación autoritaria de valores de una sociedad. En ese mismo orden de ideas, Mitchel (citado en Ortiz, 1986) argumenta que el sistema político busca encontrar la manera en que los fines colectivos de la sociedad sean seleccionados, y asimismo crea las condiciones idóneas para que se adopten decisiones sociales que sean beneficiosas para la población en su conjunto. Es relevante la importancia que debe tener la organización interna de un

sistema político porque brindará una gran cantidad de mecanismos con los cuales se enfrentan a los ambientes que pueden amenazar la estructura del sistema político.

Gutiérrez (2006), señala tres características centrales que tiene el actual sistema político colombiano. La primera de estas características es que actualmente hay una hiperfragmentación por la multiplicidad de partidos que hacen parte del juego electoral; la segunda característica, es la criminalización de las prácticas políticas donde se evidencia la cercanía que ha existido entre los grupos políticos tradicionales y los actores armados producto de la hiperfragmentación del sistema político; y la tercera es la desestructuración y desinstitucionalización de los partidos tradicionales que entraron en un declive hacia la década de los 90, en especial el partido liberal que presenció como muchos de sus políticos salieron del partido para hacer parte de nuevas colectividades políticas.

Según Gutiérrez (2006), durante el frente nacional y en los años posteriores al mismo, los partidos tradicionales seguían teniendo un nivel mínimo de cohesión e ideologización que impedía que las maquinarias regionales tuvieran incentivos para salirse o abstenerse de participar en la contienda electoral. Pero, continua Gutiérrez (2006) afirmando, las facciones regionales entraron en luchas y disputas burocráticas aumentando la división intrapartidista. Como consecuencia a este crecimiento de las facciones regionales que pretendían mayor autonomía y poder se da una pérdida de poder del centro partidista, y por lo tanto, los barones electorales adquirieron mayor autonomía. Este ascenso de las elites regionales trajo consigo la oposición nacional al crecimiento local (pp. 244).

La consolidación del poder local generó un fenómeno especial que el profesor Francisco Gutiérrez (2007) denomina “inclusión al detal”, que trajo como consecuencia el exacerbado clientelismo ya que el beneficio individual comenzó a primar sobre el beneficio colectivo. De esta manera, González (2003) afirma que el clientelismo tendría la función de generar una inclusión vertical y subordinada de

las masas a la vida política sin llegar a ser una amenaza para el régimen político, que estaba acostumbrado a no tener en cuenta las demandas de estos sectores sociales. Esta inclusión al detal incrementó el poder de los cacicazgos e intensificó las dinámicas heredadas por el frente nacional (Gutiérrez, 2006. PP.248) ya que el sistema político colombiano continuó siendo cerrado porque estos agentes políticos locales crearon las condiciones básicas para perpetuarse en el poder y mantener emporios políticos. González (2003) señala que estas relaciones clientelares establecieron una serie de jerarquías sociales y económicas, que a su vez conformaron una mancomunidad de grupos regionales y locales con proyectos de carácter nacional.

Es necesario profundizar brevemente en el concepto de clientelismo por las connotaciones históricas que ha generado en las prácticas políticas del país. Según Leal y Dávila (1990), al clientelismo se le identificó como “un aprovechamiento del poder para obtener ventajas electorales de tipo personal. La manipulación de puestos públicos y los favores personales con los recursos del Estado son las practicas que con más frecuencia han sido señalada para definir el problema” (pp. 36). Estos autores recalcan que con la implementación del frente nacional, el sistema político tuvo una profunda transformación porque el “bipartidismo sectario” que hasta ese momento era el motor principal del régimen político colombiano, perdería su relevancia y su importancia. Ante el retroceso del bipartidismo tradicional, el clientelismo se convirtió “en la manera como se ponen en funcionamiento las directrices que regulan las relaciones políticas de la sociedad, es decir, el régimen político” (Dávila y Leal, 1990, 47)

Según Gutiérrez (2006), otro factor que contribuyó a la hiperfragmentacion fue el cambio de las reglas de juego, se dejó atrás un sistema político tradicional que no tenía adecuadas reglas de juego y que fomentaba la corrupción; con el sistema político moderno se pretendía rediseñar las reglas de juego pero esto fue insuficiente. A pesar de este cambio constitucional, señala Gutiérrez (2006), los tradicionales lograron sobrevivir al cambio de las reglas de juego. Cada cacique

regional creó su propio movimiento para tener acceso a los recursos; se dio la “municipalización” de la vida política colombiana, movimientos políticos pequeños lograron desarticular a los grandes barones electorales liberales. Según Marco Palacios (citado en González, 2003) la permanencia de estos poderes tradicionales a nivel regional generaron unos bloqueos sistemáticos impidiendo reformas, lo que produjo un incremento de la violencia y, por consiguiente, un estancamiento del sistema político. González (2003) señala que los gamonales locales se convirtieron en intermediarios de las pretensiones locales y regionales frente al gobierno nacional, este papel relevante permitió la construcción de maquinarias electorales que tenían la facultad de articular a los congresistas con el gobierno central y las administraciones departamentales y locales.

Según las premisas de Gutiérrez (2006), la hiperfragmentación política trajo consigo la dispersión electoral, lo que generó que los poderes regionales empezaran a tener vínculos con las organizaciones ilegales; se forjó la desinstitucionalización de los partidos favoreciéndose los agentes faccionalistas y causando una desajuste de las fuerzas tradicionales que solían tener el poder. Pero, cabe aclarar, que estas fuerzas tradicionales supieron reinventarse y adaptarse al cambio normativo lo que les permitió crear las condiciones necesarias para seguir manteniéndose en el poder (Gutiérrez, 2006: 312).

La segunda característica del sistema político colombiano que enuncia Gutiérrez (2006) es la criminalización de la política. Con la consolidación de los poderes regionales se evidencia la relación entre la institucionalidad democrática con la criminalidad organizada. Es así como el clientelismo criminalizado se convirtió en un enlace central entre el Estado nacional y las regiones (Gutiérrez, 2006). De esta manera, los directorios departamentales eran nichos individuales de los políticos quienes solían estar aliados con actores armados que estaban interesados en dominar la política regional. Ante el declive de los directorios nacionales de los partidos tradicionales, hubo un auge del gamonalismo regional (Leal y Dávila, 1990, 48) que generó incentivos para que fenómenos ilegales como el narcotráfico

influyeran en la toma de decisiones de las instituciones regionales. Gutiérrez (2007) señala que esta ventana de oportunidad que tenían los grupos para aliarse con políticos tradicionales y controlar el poder en las regiones crearon unos bloqueos al sistema. Básicamente, porque estos actores armados encontraron que era rentable tener el control de la vida política local ya que podían tener acceso a rentas y a capital político. Esta situación incrementó el clientelismo y alejó a las personas de participar en los asuntos públicos. La excesiva desigualdad permitía a las elites bloquear reformas distributivas y consolidar su poder (González, 2003).

Fue en ese contexto, que la criminalidad organizada logró tener una gran base social en territorios determinados. Fabio Velázquez (2010) señala cuales fueron las estrategias que utilizaron los grupos armados para apoderarse de los sistemas políticos locales y mantener el control social. Divide en 3 las estrategias que utilizaron los grupos armados para acaparar el poder: i) control territorial; ii) control político-electoral y iii) control de la gestión pública.

El control territorial consistía en lograr un asentamiento en el territorio, acaparar tierras, insertarse en la economía local y controlar el flujo de personas, bienes y servicios, y de información (Velásquez, 2010: 176); el control político electoral pretendía tener influencia sobre los actores políticos y sobre las autoridades públicas; lograr objetivos estratégicos en el territorio, en lo político y económico. En lo económico, se financian campañas, se constriñe al elector y se realizan amenazas a sectores opuestos a sus intereses. Por otra parte, se busca eliminar la presencia de líderes sociales mediante amenazas, desplazamiento forzado y asesinato; finalmente, en el control de la gestión pública logran tener incidencia en las políticas públicas, en la asignación y manejo de los recursos públicos y en la contratación (Velásquez, 2010: 176). Al controlar este factor se tendrá a disposición el presupuesto local que generara enormes beneficios a estos poderes facticos.

La tercera característica que tiene el actual sistema político colombiano es la desestructuración y desinstitucionalización que han tenido los partidos tradicionales colombianos. La constitución del 91 pretendía abrir el espectro de participación para que nuevas fuerzas políticas que habían sido tradicionalmente excluidas del juego político entraran a hacer parte de las contiendas electorales. Fue así, según Velásquez (2010), que se generó en el país una ola de entusiasmo porque iba a existir un sistema político incluyente donde los espacios de participación serían un aliciente fundamental para crear las condiciones esenciales donde las personas pudieran ser partícipes del juego democrático. Pero, esta apertura política no supo medir el nivel de sobreoferta política que se presentó (Gutiérrez, 2006), había un incontable número de partidos ya que el marco normativo no limitaba la creación de agrupaciones políticas. Con la reforma del 2003, se quiso corregir esta falla y se logró reducir el número de partidos, llegando a un momento histórico porque formalmente se produjo la finalización del bipartidismo nacional. (Gutiérrez, 2006).

El fin del bipartidismo se fue generando por los cambios normativos, por el declive de los partidos tradicionales y por la aparición de nuevos movimientos políticos. El declive de los partidos tradicionales fue un factor que contribuyó en gran medida porque estos partidos estaban devaluados. Duque (2006) denota como en los partidos tradicionales se dio un fraccionamiento que generó la incursión de nuevos liderazgos de congresistas con gran poder en lo regional (pp. 17). En especial el partido liberal, presencié como un gran número de políticos salieron del partido para tener su propia etiqueta partidista. Gutiérrez y Acuña (2010) “catalogan a estos políticos como políticos transicionales, porque son políticos que nacen, crecen y se forman en los partidos tradicionales pero pretenden camuflarse como independientes para evitar el desprestigio de pertenecer a los tradicionales” (pp. 116).

En este nuevo contexto se vieron fortalecidos los personalismos políticos en detrimento de las instituciones partidistas quienes no lograron adaptarse a estos

cambios, el electorado empezó a tener mayor afinidad hacia el cacique y los directorios departamentales fueron eslabones que utilizaban los caciques para su beneficio. Ante la muerte del bipartidismo y el estancamiento de los partidos, Shuggart (citado en González, 2003) evidencia como el sistema político colombiano ha sido incapaz de generar mayorías estables lo que ha impedido la concertación de soluciones a los profundos problemas que tiene el país. La personalización de la política ha generado que el interés colectivo continúe estando devaluado (Gonzales, 2003).

En la última década, el sistema político del país se ha caracterizado por la irrupción de múltiples fuerzas políticas que han ganado escaños en el congreso de la república y en los escenarios mediáticos, el tradicional bipartidismo le dio paso a un sistema político multipartidista. Gutiérrez (2007) catalogó a este fenómeno como “el deshielo del sistema”. Actualmente, los políticos transicionales son los que tienen el predominio electoral en el país y fueron los encargados de consolidar el proceso en donde se relega al bipartidismo tradicional. De igual forma, es necesario recalcar la enorme incidencia que tiene grupos ilegales en los escenarios locales que impiden la consolidación de procesos de democratización en el país. Estos grupos en alianza con los políticos locales han establecido verdaderos feudos políticos elección tras elección.

1.2 Privatización de la seguridad

Según Mandel (citado en Laborie, 2012), la privatización de la seguridad comenzó cuando los grupos sub-nacionales comenzaron a pugnar para tener una mayor autonomía e influencia en un territorio determinado. Esta situación convirtió a estos grupos en competidores del Estado como proveedores de seguridad. Estos nuevos escenarios que se han originado a raíz de este fenómeno han puesto al Estado nacional en una paradoja: no sabe si reprimir a estos grupos o darle una legitimidad para que estos provean la seguridad en territorios determinados.

Laborie (2012) señala que actualmente los actores armados no estatales operan en dos sentidos diferentes: ascendente (Bottom- up) y descendente (Top-Down). El Bottom-up es cuando el Estado por “renuncia o por incapacidad” no puede garantizar ni proveer un mínimo nivel de seguridad a una población determinada. Asimismo, las instituciones estatales que funcionan a nivel regional no son eficaces en el cumplimiento de sus funciones. Este vacío de poder es visto como una ventana de oportunidad por parte de grupos armados no estatales que pretenden ocupar el lugar dejado por parte del Estado. Pero estos grupos no solo asumen un rol en lo militar, empiezan a influir en lo educativo, en lo social y en lo económico. De esta manera, estos actores empiezan a ganar legitimidad y poder ante los habitantes de la región convirtiéndose en un poder factico que tiene el control de la zona (Laborie, 2012. pp. 27)

En el sentido Top- Down es el Estado el que promueve la conformación de estos grupos porque no puede responder a todas las demandas de servicios de seguridad. Por lo tanto, hay una disolución del monopolio estatal de la violencia ya que de manera consiente el Estado asume que su aparato de fuerza no es capaz de cubrir las demandas de seguridad de todo un territorio. Es así que esta es una opción válida que emplea en aras de mantener el orden y la seguridad pero asumiendo que es capaz de perder cierta autonomía concediendo estas facilidades a nuevos actores sociales (Laborie, 2012. pp. 28).

La privatización de la seguridad en las regiones se ejerce no por cuestiones ideológicas, se busca principalmente controlar estas zonas para tener a disposición una gran cantidad de recursos económicos, control sobre el territorio y poder social (Nye, citado en Snyder, 2008). Cuando es por recursos económicos surge la particularidad de que hay un contexto en donde se presenta un alto crecimiento económico del mercado ilegal y el Estado no puede controlar ni regular estas prácticas económicas dentro del territorio. Rubio (1997) complementa esta idea afirmando que “la proliferación de instituciones paraestatales se genera por el abandono que sufre un territorio por parte del Estado. Estos vacíos de poder

propician la conformación y consolidación de para-estados privados que a través de la consolidación de su poder terminan gobernando o cogobernando un territorio específico. Esta cooptación del poder y privatización del poder se da mediante dos maneras determinadas: conocen todas las fracturas del sistema porque saben cómo funcionan las instituciones formales e informales; y porque emplean de manera constante la violencia en la región”. (Rubio, 1997: 4)

La privatización de la seguridad tiene como característica primaria en nuestro país que es de carácter local, este proceso suelen promoverlo las elites locales y en algunas ocasiones cuenta con la legitimidad del Estado que no puede responder a todas las demandas de seguridad que exigen los ciudadanos en las regiones. Según Francisco Gutiérrez (2012), la privatización de la seguridad es un proceso que “surge de elites regionales vulnerables que por razones determinadas perciben que están expuestas en su vida y en su propiedad, y no tienen barreras altas para usar la fuerza del Estado de manera consistente para su protección” (pp.103). Prosigue con su idea, afirmando que las elites tienen unas características determinadas; por un lado, tienen escasos incentivos para promover la acción colectiva en el ámbito de la seguridad que produzca los resultados esperados; por la condición existente de fragilidad que perciben las elites hay una situación desfavorable de las políticas públicas lo que conlleva a una radicalización y propensión hacia la privatización de la seguridad (Gutiérrez, 2012. pp. 103)

Pero esta privatización de la seguridad también ha tenido la legitimidad y el apoyo por parte del Estado en diversos momentos. Tradicionalmente, el Estado colombiano nunca ha desarrollado un proceso de regulación sobre la provisión de seguridad por parte de actores armados no estatales, lo que instituye uno de sus más históricos errores (Gutiérrez, 2012. pp. 117). Desde el decreto 3398 de 1965⁷,

⁷ Este decreto señalaba que la seguridad de la nación no solo era competencia de las fuerzas armadas, sino de todos los ciudadanos “Todos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, podrán ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad”. Decreto legislativo 3396 de 1965 firmado el 24 de diciembre de ese año.

que permitía la conformación de grupos de autodefensas civil, se ha generado un proceso de correlación entre las autoridades estatales y estos grupos privados que tienen el poder de la fuerza en las regiones. Es así como Gutiérrez (2012) afirma que siempre ha existido una conexión profunda entre el proyecto paramilitar y la institucionalización de la privatización de la seguridad. Otro ejemplo que permite constatar lo anteriormente mencionado es el decreto 356 de 1994 que legalizaba las convivir, básicamente su objetivo era “ayudar a la fuerza pública a coordinar la colaboración de la ciudadanía en materia de seguridad y de lucha contra los grupos armados ilegales” (Gutiérrez, 2012: 118).

A raíz de este marco normativo que se creó alrededor de las convivir, les permitió convertirse en un instrumento útil para el proyecto paramilitar que se encontraba en crecimiento; permitió coordinar actividades con toda la clase política del país y con actores legales que tenían afinidad con ese proyecto contrainsurgente. Es necesario resaltar como en Colombia se ha dado el principio denominado “cada cual a lo suyo” (Gutiérrez, 2012), el cual básicamente permitía que los gobiernos nacionales no tuviesen la oposición de las elites regionales a nivel nacional pero asimismo estas elites no iban a ser controladas y podían tener el control a nivel local. Es así como el gobierno se desentendió de las necesidades locales y delegó la autoridad a estas elites que no tenían ningún impedimento para realizar lo que creían era necesario o conveniente para la región.

El régimen colombiano ha sabido canalizar las exigencias de las elites locales; estas elites se han caracterizado por tener intereses especiales y particulares, y el Estado colombiano ha sabido suplir y no intervenir en la maximización de estos intereses. Esta relación de mutua conveniencia ha permitido una perennidad de la privatización de la seguridad ya que cada actor se mantiene enfocado “en lo suyo” y no se interpone en los intereses de los otros actores. Pero Gutiérrez (2012) aclara que las demandas relativas a la privatización de la seguridad debían provenir de elites que fueran lo suficiente significativas y que pudieran representar

una amenaza para los intereses de los actores gubernamentales o pertenecientes a las elites nacionales.

Es notorio como la privatización de la seguridad en el país habría sido imposible sin la complicidad del centro con las elites locales. Estas alianzas han estado inmersas en un juego de intereses donde cada actor saca el mayor provecho de sus logros. De esta manera se ha logrado imponer un orden social y cultural en las regiones donde la población tiene que adaptarse a las imposiciones provenientes de estos actores extra- estatales (Rubio, 1997).

1.3 Autoritarismos sub-nacionales

Otra categoría relevante y esencial para la realización de esta investigación son los autoritarismos sub-nacionales. Esta categoría es primordial porque el sistema político (local) y la privatización de la seguridad son categorías esenciales para la existencia de un autoritarismo sub-nacional. No hay una definición precisa en torno a este concepto pero se han hecho algunas aproximaciones. Balan (2013) después de realizar un análisis bibliométrico en torno a este concepto infiere que “ i) el hecho de formar parte de regímenes democráticos impone una cota superior al nivel de autoritarismo que estos regímenes pueden ejercer y ii) su anclaje en las clasificaciones de cuño dicotómico- vulnerables a la pérdida de información le imprime una pobre sensibilidad a la significativa variación que estos regímenes exhiben en distintas dimensiones” (Balan, 2013:4). Es así como no da una definición exacta del concepto porque no cree que se haya tratado de manera correcta la noción de autoritarismo sub-nacional en regímenes democráticos. En esa misma línea de ideas Gervasoni (Citado en Balan 2013), señala que en los regímenes provinciales no hay tantas diferencias ni problemas de gran envergadura como en un régimen democrático; y no hay herramientas disponibles para detectar y medir los niveles de autoritarismo en una región específica. De esta manera estos dos autores señalan que la implantación de un autoritarismo a nivel región depende de factores estructurales y no estratégicos.

Behrend (Citado en Balan, 2013) para hablar de autoritarismos sub-nacionales formula una explicación que tiene tanto elementos estructurales y estratégicos. La autora cataloga a los enclaves autoritarios o los autoritarismos sub-nacionales como “juegos cerrados”; “estos juegos cerrados esencialmente son características determinadas que tienen las provincias autoritarias y las clasifica de la siguiente manera: i) elecciones libres, limpias y regulares ii) monopolio del acceso a cargos públicos en manos de pocas familias iii) control de los medios de comunicación iv) control del estado provincial, distribución de recursos públicos y clientelismo v) control de las oportunidades económicas vi) control del poder judicial” (pp. 10). Algunas de estas características son de carácter estructural y hay otras características que unas pocas familias controlan, es decir son de carácter estratégico. Según Behrend (2011), la implantación de un autoritarismo se debe a un juego de intereses donde los actores nacionales permiten que las elites de la región impongan su poder y voluntad. En contraste a esta visión de Balan (2013) y Gervasconi (2010) y asemejándose en algunos puntos a Behrend (2011), Edward Gibson (2012) presenta una visión estratégica en torno a este concepto. Afirma que el autoritarismo sub-nacional no puede ni debe ser entendido como “un asunto que solo concierne a lo local, por el contrario, debe ser visto como el resultado de una serie de dinámicas más amplias de gobernanza territorial donde se emplean una serie de estrategias de control territorial y poder” (pp. 204). Es cuestionable cómo los autoritarismos sub-nacionales imperan en regímenes democráticos nacionales y cómo en estas democracias la manera como se distribuyen las prácticas e instituciones a lo largo del territorio de un Estado- nación son desiguales. Es así como se observa que no hay transparencia en los procedimientos electorales; y “los regímenes autoritarios regionales logran privar a sus habitantes de derechos y libertades que tienen otros habitantes de ese mismo Estado- nación que habitan otras regiones” (Gibson, 2006: 206).

Estos autoritarismos sub-nacionales han logrado instituir su poder no solo por el dominio que tienen a nivel local, sino también por la influencia que logran ejercer a

nivel nacional. Gibson (2006) reconoce tres tipos de estrategias que emplean las elites autoritarias para consolidar su poder y que son necesarias si quieren seguir manteniéndolo, son las siguientes: i) parroquialización del poder ii) nacionalización de la influencia y iii) monopolización de los vínculos institucionales entre lo nacional y sub-nacional.

Según Schattschneider (citado en Gibson, 2006), en cualquier situación de conflicto entre dos partes desiguales, la parte más fuerte tendrá el incentivo principal de mantener el conflicto aislado y privado. Bajo esa premisa, la parroquialización del poder consiste en realizar una “estrategia de control de fronteras” donde nadie ajeno a la región puede intervenir en las disputas y conflictos locales. Rokkan (1983) aseveraba que si los límites de la periferia (región) son cruzados política, económica y culturalmente pueden producirse efectos importantes sobre la estructura interna de la población que habita estos territorios. En ese orden de ideas, es menester para las elites lograr que esos límites de la región no sean vulnerados por ningún actor externo para seguir teniendo el poder dominante. Diamond (Citado en Gibson, 2006) señala que en ocasiones estas fronteras son difíciles de visibilizar por lo tanto se logran sobrepasar. Pero si se logran garantizar este poder de las fronteras, la segunda estrategia que deben consolidar es la nacionalización de la influencia. Básicamente, esta estrategia busca que estas elites regionales controlen espacios nacionales trascendentales y significativos con el único fin de consolidar y defender su control a nivel provincial (Gibson, 2006: 216). Si logran tener incidencia a nivel nacional podrán tener influencia sobre actores políticos nacionales y estos no podrán poner en riesgo el poder que tienen las elites autoritarias porque no pueden o no tienen la capacidad para hacerlo. Pero sin estas estrategias de consolidación del poder a nivel nacional, las elites locales no influirían en poder maximizar la autonomía provincial.

La tercera estrategia, monopolización de los vínculos entre lo nacional y lo sub-nacional, está muy relacionada a la anterior estrategia ya que es indispensable que

las elites autoritarias tengan el control de lo que sucede a nivel nacional para que no haya incidencias negativas a nivel local. Torrow (citado en Gibson, 2006) afirma que en lo local quien controla los vínculos, controla el poder. Y propone una categorización de las redes y vínculos de intercambio entre el centro y la periferia: los vínculos materiales y los inmateriales. Los vínculos materiales es lograr controlar las instituciones que tienen alcance nacional o que son importantes en la región; y lo inmaterial, hace referencia a manejar los flujos de información que hay entre lo nacional y lo local. Estas elites dominantes han logrado por décadas controlar estos flujos consolidando la autonomía provincial.

Con base a esos tres mecanismos, Gibson (2012) sugiere que se pueden perpetuar los autoritarismos subnacionales pero también existen otros elementos y otras características preestablecidas que son esenciales para instaurar y mantener estos regímenes autoritarios. Según Montero (citado en Balan, 2007), “los Estados con baja densidad poblacional, homogeneidad social, bajo nivel de versificación económica y baja autonomía económica de los ciudadanos son más vulnerables a la instauración y/o imposición de dominación autoritaria por parte de las elites regionales. Básicamente, por dos razones fundamentales a) porque no existen las condiciones para el surgimiento de clivajes políticos que puedan generar un sistema de carácter pluralista b) porque los costos de coerción son más bajos” (pp. 15). Para generar cambios en estas regiones, Behrend (citado en Balan, 2007) recomienda al Estado nacional quebrantar la base económica de estas elites políticas, si se logra este propósito habría posibilidades de disminuir el poder de estas elites y que los ciudadanos regionales no tengan la dependencia tradicional que han tenido hacia esas elites.

Estos autoritarismos sub-nacionales en pocas ocasiones son conflictos locales. Todas las esferas de lo local y lo nacional están interrelacionadas de varias formas, no hay ningún autoritarismo que se puede consolidar teniendo influencia solo en lo local. Y en base a esta paradoja donde todas las variables locales se conectan a nivel nacional es que Gibson (2012) enuncia una tipificación para

evidenciar como se da esta conexión entre lo local y lo nacional y cuáles son las diversas maneras de estos actores de tomar el poder.

En este contexto de autoritarismo se da la particularidad de que las provincias son autoritarias y las ciudades son plurales. “Las ciudades son sitios de diversidad social y de competencia política, mientras las áreas rurales tienden a ser bastiones de tradición y de dominación autoritaria” (Gibson, 2006: 223) donde las maquinarias políticas han mantenido el control. Estas maquinarias encabezadas por las elites tienen facilidades para mantener el poder ya que estas provincias mayoritariamente son rurales donde las personas están desinformadas y carecen de incentivos para ser partícipes de los procesos democráticos.

Los autoritarismos sub-nacionales que se han establecido en el país se deben a una conjugación de una multiplicidad de factores que han incidido para que este proceso se consolide y perpetúe en las regiones del país. Estos regímenes autoritarios han logrado privar a sus habitantes de derechos que tienen personas en otros territorios del mismo país. Esta situación se presenta porque hay una desconexión entre el Estado nacional y el estado local, en las regiones algunas castas políticas han logrado que su poder tenga incidencia en todos los aspectos de la vida. Las características del sistema político ofrece la oportunidad de que estos poderes se consoliden, la hiperfragmentación genera incentivos para que las elites acaparen esos espacios existentes y en alianza con actores ilegales han creado prácticas políticas, económicas y sociales específicas en determinadas regiones del país. En ocasiones este control acérrimo por parte de elites se da por medio de la legitimidad del Estado quien tiene incentivos para no interceder en las dinámicas regionales. El poder regional que se ha impuesto es tan amplio que estas elites son capaces de impedir que reformas nacionales no incidan en su poder local; es necesario tener en cuenta el papel predominante que tiene los actores ilegales en un país como Colombia, ya que por décadas han logrado crear mecanismos y estrategias para que la clase política siempre esté sujeta a sus imposiciones y determinaciones.

Capítulo 2. Caracterización del occidente de Boyacá

El capítulo 2 pretende hacer una caracterización socioeconómica y describir el contexto en el cuál se desarrolló la privatización de la seguridad en el occidente de Boyacá. Es así como este capítulo se divide en 2 partes: i) Se hará una caracterización socioeconómica del occidente de Boyacá con base en cifras importantes que se encontraron y en las entrevistas que se le realizaron a los sacerdotes quienes recalcan las limitaciones o las precariedades que tienen los habitantes de esta región; ii) la segunda parte del capítulo, se enfoca en describir la manera como se privatizó la seguridad en la región.

2.1 Caracterización socio-económica

El occidente de Boyacá se ha caracterizado por ser una región en la cual la minería ha sido el eje principal de la economía municipal; los municipios de esta región han dependido durante décadas de la producción de esmeraldas que se da en la región. Pero ha sido paradójico que así cómo este producto genera unas utilidades millonarias año tras año, el occidente de Boyacá siga sumido en la pobreza y en el atraso social. Los niveles de necesidades básicas insatisfechas (NBI) son altos (ver en anexos tabla 15). Como se observa en la tabla 15, un número importante de la población vive en la pobreza y tiene precarias condiciones de vida.

Con base en el testimonio de Monseñor Juan Norberto Forero, quien asegura que: “el occidente de Boyacá es una región rica con gente pobre; básicamente, porque el negocio de las esmeraldas ha sido monopolizado por unos pocos.” Y complementa su idea afirmando que “la población está a la deriva por el egoísmo de los “ricos” quienes no han fomentado el desarrollo, solo han buscado incrementar el beneficio privado”. Se podría argumentar que esta situación social es producto de que las elites han logrado mantener alejado al Estado de los asuntos de incidencia de la región y es así como se han beneficiado de este recurso primario. En esta región, la *territorialidad*, ha sido implementada por las

elites esmeraldíferas. La territorialidad, en términos de Sack (citado en Gibson, 2006: 211), “es una estrategia espacial para afectar, influir o controlar recursos y personas, mediante el control de una área”. Mediante estas estrategias se logra monopolizar el poder en la arena política local y se consigue manipular niveles de poder en otras áreas. Las familias esmeralderas han logrado controlar el flujo de recursos y personas en la región obteniendo un enorme beneficio económico y político en contraste de la población que sigue inmersa en la penuria.

El padre Abraham Gil Sierra (Ver en anexos, 1. preguntas de entrevistas), complementa la percepción que tienen los habitantes del occidente acerca de la situación socio-económica que tiene la región, quien considera “que la explotación de esmeraldas no ha generado riqueza en la región, porque los que tienen el control explotan las minas, crean la riqueza pero no invierten en la región, se van “. De esta manera, reclama mayor presencia estatal en la zona para que resarza su obligación de garantizar el progreso y el desarrollo de la región. A raíz de la pobreza y de la falta de oportunidades, las personas se han visto en la necesidad de emigrar llegando a los pueblos donde se encuentran las minas más importantes y a otras ciudades del país. Las proyecciones de Población elaboradas por el DANE (Ver anexos tabla 13) indican que hacia el 2020 algunos municipios del occidente de Boyacá tendrán menos habitantes de los que tenían en el año 1985, siendo un indicador de pobreza y de falta de oportunidades que tiene la región.

Otro indicador que demuestra la difícil situación económica y social que existe en el occidente de Boyacá, y en especial en estos 8 municipios, son los recursos municipales de compensación que recibe el departamento y que esté a su vez distribuye en los distintos municipios del departamento. Boyacá recibe 16.776.883.723 millones de pesos y los municipios del occidente de Boyacá reciben entre el 0.30 % y 0.70 % de este presupuesto (ver tabla en anexos 14). Se observa que estos municipios a pesar de obtener recursos provenientes de las regalías, no han sabido utilizar estos dineros en aras de darles un mejor nivel de vida a sus habitantes. Estos gobiernos no pueden ejecutar las obras libremente por

la existencia de una elite que se caracteriza: por controlar a estos gobiernos y por cerrar los espacios políticos a actores externos que podrían aliarse con la oposición local o generar un cambio de elite (Gibson, 2006). Es así como estas elites imponen su voluntad ante la desidia estatal que no actúa para revertir esta situación (Ver tabla 15 con índices socioeconómicos de los municipios en anexos). Estos datos permiten inferir la conexión entre las precariedades de la región con el control por parte de unas elites.

2.2 Caracterización de la privatización de la seguridad

El occidente de Boyacá es un territorio en donde tradicionalmente se ha impuesto la ley del más fuerte y donde se han librado intensas guerras por obtener el control de la tierra y poder explotar las minas. Señala Uribe (1992) que el occidente de Boyacá ha sido objeto de un tradicional abandono estatal que lo ha convertido en escenario de múltiples guerras entre los distintos grupos que tienen el interés primario en controlar el territorio y explotar las minas a su antojo. Actualmente, continuando con la tradición, unas cuantas familias siguen ostentando el poder en la zona y siguen asumiendo las funciones que le corresponden al Estado; esta legitimidad que tienen las familias esmeralderas al suplir las falencias del Estado colombiano les proporciona una autoridad incuestionable en estos territorios y les permite consolidar un poder local para proteger y consolidar el dominio de las minas de esmeraldas. En una entrevista que se le realizó a un ex trabajador de Tecminas, la empresa de Víctor Carranza, y que prefirió mantener su nombre en el anonimato, proporcionó información acerca de quiénes son las familias que tienen el poder en algunos de los pueblos del occidente de Boyacá. A partir de la información otorgada se puede establecer que el poder en estos pueblos la controlan las siguientes familias:

Tabla 1 Familias que ostentan el poder en los municipios

Maripi	Muzo	Quipama	San Pablo de Borbur
Familia Rincón (Pedro)	Familia Molina (Jimmy)	Familia Molina (Jimmy)	Familia Murcia Chaparro

"Orejas" Rincón);Familia Triana (Horacio de Jesús Triana); Diosdé Gonzales.	Molina y Edwin Molina); Enrique Díaz; Darío Campos Samudio	Molina y Edwin Molina); Enrique Díaz.	(Oscar y Alirio Murcia Chaparro); Familia Barrera
---	--	---------------------------------------	--

Tabla de elaboración propia con base en la información obtenida de la entrevista al ex trabajador de Tecminas

El anterior cuadro ejemplifica cuales familias tienen el control y el poder en estos municipios, de los restantes municipios no se tiene información clara porque el entrevistado aseguró desconocer quien tiene el poder en los otros municipios ya que tras la muerte de Víctor Carranza se podría dar una reconfiguración del poder territorial en los municipios. Esta información proporcionada por el entrevistado se podría retroalimentar con un artículo investigativo del periódico El tiempo⁸ (2013), el cual señala quien controla las 4 minas más importantes de la región:

Tabla 2. Control de las minas en la actualidad

Mina de Coscuez	Mina de Cunas	Mina de la Pita	Mina de Muzo
Esmeracol (Jesús Hernando Sánchez) tiene el 54 % ; otros accionistas minoritarios (Michael Rincón, José Libar Cabra, Beatriz Godoy)	Familia Carranza (38%); Jesús Hernando Sánchez (25%); Thorn Investment Limited de Houston (12%); Hermanos Rodriguez Daza (10%); Tiberio Gonzales (10%)	Julio Lozano; Leonardo Absalón Pulido; Pedro Nel Rincón; Gilberto Garavito y José María Ortiz, extraditados a los estados unidos; las viudas de Yesid Nietos, asesinado en Guatemala en el 2007; Diosdé Gonzales	Familia Carranza y accionistas panameños anónimos (Blackrock Group, Enoc Trading Group, Hervey comercial S.A, Golman Capital Fund y Makam Service S.A)

Tabla elaborada en base a un archivo periodístico del periódico El Tiempo

⁸ El artículo expone quienes son los accionistas mayoritarios de las 4 minas del occidente de Boyacá. Investigativa, U. (19 de mayo de 2013) "Los nuevos "zares" de la esmeralda". Periódico El Tiempo. Recuperado el 10 de octubre de 2014, en el Periódico El Tiempo. URL : <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12809002>

Actualmente, el poder de la región lo ostentan las mismas familias- que siguiendo las premisas de Gibson (2006) se encargan de controlar el poder, imponen un autoritarismo territorial, inciden en los asuntos locales para que nadie se entrometa en las dinámicas regionales y no exponer el mando que ostentan-, los herederos de los líderes de las familias que han muerto y/o personas que emergieron en la región con el beneplácito de los líderes de la región. Pero para llegar a abarcar este inmenso poder no se utilizaron vías pacíficas, desde los años 60 se han venido dando conflictos y guerras entre familias. Es así que para entender un poco más las dinámicas sociales y políticas del occidente de Boyacá, es necesario recapitular en que consistió la “guerra verde”, que tuvo distintas fases y conocer el papel del Estado en el desenlace de este conflicto ya que esté contribuyó a que un recurso público se convirtiera en un bien privado, lo que incentivó la consolidación de un poder local. Para tener una mayor claridad de los distintos sucesos de la guerra verde, se tendrá como referentes históricos dos libros: *Limpiar la tierra, guerra y poder entre esmeralderos* escrito por María Victoria Uribe; y el libro de Pedro Claver Téllez, *VERDE la historia secreta de la guerra entre los esmeralderos*. Asimismo, se tendrá en cuenta los testimonios de los sacerdotes entrevistados que fueron un actor fundamental en el acuerdo de la paz verde.

Según Uribe (1992), en 1947 el banco de la republica comienza los trabajos de explotación en las minas de Muzo y Coscuez. Esta explotación se caracterizó por ser excluyente y monopolista ya que marginó a la población local. Esta situación incentivó la minera clandestina o el “guaqueo” por parte de los habitantes de la región. En el año de 1960, se descubrió la mina de peñas blancas lo que propagó la minería clandestina incrementándola a un 57 % (Claver, 2011), gente ajena a la región llegó buscando una mejor calidad de vida. El descubrimiento de esta mina acrecentó los conflictos sociales aumentando el número de muertes por el intento voraz de acceder a las preciadas gemas. De esta manera, para traer estabilidad a la región, reducir el número de muertes y trabajar de manera tranquila, los máximos patronos de la zona como: Pablo Emilio Orjuela, Isauro Murcia, Parmenio

Molina, Mario Moreras contrataron los servicios de Efraín Gonzáles (PP.95), uno de los más temerarios bandoleros de la época conocida como la violencia. Con la llegada de Gonzáles hubo una relativa calma, el índice de homicidios se redujo y las personas que fueran una amenaza para la estabilidad de la región eran asesinadas por Gonzáles y su grupo de bandoleros. Es así como la policía comenzó a estar subordinada a los esmeralderos y la presencia del Estado era cada vez más nula. En 1965, Efraín Gonzales es asesinado por el ejército colombiano, la muerte del encargado de la seguridad de la región al cual todos respetaban y temían trajo el caos a la región desencadenándose oleadas de violencia. El primer conflicto de gran repercusión fue el enfrentamiento entre Pablo Emilio Orjuela y Mario Moreras hasta ese momento los principales patrones de la región. El desenlace de este conflicto es el asesinato de Pablo Emilio Orjuela por parte del grupo de Mario Moreras; como sucesor de Orjuela, asciende Isauro Murcia quien es denominado como el nuevo jefe de las esmeraldas, y en un acto de venganza asesina a Moreras autor intelectual de la muerte de su antiguo patrón (Claver, 2011).

Con la llegada Isauro Murcia como el nuevo zar de las esmeraldas cambia la estrategia de los esmeralderos, buscaban legalizar su fortuna convirtiéndose en empresarios legales. La estrategia consistía en desarticular al banco de la republica desde adentro evidenciando la rapaz corrupción que había en esa organización. Esa estrategia logra ser exitosa y el banco de la república se le quita esa facultad; el gobierno de Lleras Restrepo crea Ecominas para que administrara las minas de Muzo, Coscuez y Peñas Blancas (Uribe, 1992). Pero a pesar de la intensa presión por parte de los esmeralderos, el gobierno no cede ante estas exigencias. Es así como los esmeralderos deciden esperar a las elecciones de 1970 y financian la campaña de los dos candidatos con mayores opciones de alcanzar la presidencia de Colombia, Misael Pastrana y Gustavo Rojas Pinilla. Se enfocan especialmente en la campaña de Pastrana, a la cual le entregan 20

millones de pesos con la exigencia de que suprimiera Ecominas y abriera licitación a empresas particulares (Claver, 2011).

El intento de legalizar la minería clandestina por parte de los esmeralderos fue el detonante para el surgimiento de una nueva guerra. A ese propósito de legalización se opusieron esmeralderos que tenían problemas con la justicia y que no serían reconocidos por el gobierno. La oposición estaba encabezada por Humberto “el ganso” Ariza quien había sido liberado por Isauro Murcia para que fuera el jefe militar en reemplazo de Efraín Gonzales. El siguiente cuadro evidenciara como se conformaron los dos bandos:

Tabla 3. Los dos bandos de la guerra verde de los 70”

La Pesada	Humberto “ Ganso” Ariza y sus aliados
Isauro Murcia, Virgilio Ávila, Vidal Álvarez y Parmenio Molina	Humberto Ganso Ariza, parientes de Efraín Gonzales y esmeralderos que sabían que su fortuna nunca sería reconocida

Tabla de elaboración propia con información de los textos académicos

Esta guerra se caracterizó por la muerte de varios integrantes de las familias que ostentaban el poder como: Pepe Gonzales, hermano de Efraín Gonzales; Olmedo Murcia, hermano de Isauro Murcia y Virgilio Ávila Forero son los casos más sobresalientes. Este conflicto finaliza cuando Isauro Murcia en alianza con la fuerza pública contribuye con información para que el Ganso Ariza sea detenido (Claver, 2011). Siguieron presentándose homicidios pero en menor medida. La continua violencia de la región provocó el cierre y la militarización de las minas por parte del gobierno. Pero en ese mismo año, Pastrana le cumplió a los esmeralderos, las minas fueron puestas en licitación y las mafias logran apoderarse de las minas con la creación de distintas empresas. Desde ese momento el Estado se ausentó de la región y no regresa, los esmeralderos se convierten en el poder local que reemplaza al Estado en todos los órdenes sociales, lo cual genera escenarios donde todas las esferas sociales estaban permeadas y son corruptas (Uribe, 1992).

En 1979, muere Isauro Murcia en un accidente aéreo, Gilberto Molina es catalogado como el nuevo zar de las esmeraldas y hereda todo el poder. Paralelamente, en la región se configura un nuevo grupo de familias con enorme de poder que empiezan a hacerles contraposición a las familias tradicionales. Este grupo se hacía llamar los “Grujusboy” o los “duros de Coscuez”, se caracterizaban por agrupar a centenares de mineros clandestinos, poderosos económicamente y con acceso a armas quienes reclamaban el derecho a “guaquear” libremente, estaban al mando de José Ruperto Córdoba alias “el colmillo” (Claver, 2011).

La guerra verde entre 1984 y 1990 se da entre estos dos grupos mencionados con anterioridad; es la guerra más cruel y sangrienta que deja alrededor de 3.500 muertos y evidencia el enorme poder de los esmeralderos . Es un conflicto que se da entre familias pero a su vez es de carácter territorial ya que cada uno de los bandos domina una zona e impide el acceso a ese territorio al otro bando. El siguiente cuadro ilustra de manera más sencilla como se componían los dos bandos en disputa y los municipios que tenían bajo su dominio. Es necesario resaltar que uno de los factores más determinantes en esta guerra fue el factor territorial.

Tabla 4. Los dos bandos de la guerra verde de los 80''

Bando de Coscuez	Bando de Borbur
José Ruperto Córdoba “ Colmillo”; Hermanos Murcia Chaparro “Garbanzo” y “Pequines”; Pacho Vargas; Mariano Ramos “Rasputin”; German Barrera García. Posteriormente, tendrían el apoyo de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “el mexicano” factor determinante en el desenlace de esta guerra. Tenían el control de los municipios de Maripi, Briceño, Pauna, Buenavista, Coper y Tunungua	Gilberto Molina; Víctor Carranza; los Hermanos López Gualteros; los Castellanos; los Salinas; los Espitia y los Suarez, quienes dominaban Borbur, Otanche, Santa Bárbara, San Martín, Peñas Blancas, Muzo y Quipama

Tabla 4. Elaboración propia con información obtenida de los textos académicos

El conflicto empieza cuando Arsenio Acero, que pertenecía al Bando de Coscuez, es asesinado y se acusa a la familia López Gualteros de haber cometido este crimen; como represalia Laureano López Gualteros, es asesinado en Bogotá. Esta serie de crímenes causa el incremento de los homicidios y la declaración de guerra. Hasta ese momento Gilberto Molina no participaba en la guerra pero decidió apoyar al grupo de Borbur ya que tenía el interés primordial de apoderarse de las minas de Coscuez. Como señalaba Uribe (1991), las diferentes guerras se han desatados en momentos en que ha habido una alta producción; en ese entonces, las minas de Coscuez eran altamente productivas lo que no dejaba de ser tentativo para cualquier patrón dominar esa zona. Es así como la violencia se incrementó y hubo muertos de ambos bandos. Fueron asesinados Julio Rincón, José Ruperto Córdoba, Pacho Vargas, Humberto “Ganso” Ariza. Un factor determinante en el conflicto fue la entrada de Gonzalo Rodríguez Gacha. Gilberto Molina le pidió apoyo para doblegar al otro bando y tener una salida a Bogotá ya que no tenían la posibilidad de acceder a la capital por la vía de Chiquinquirá. Posteriormente, Rodríguez Gacha traiciona a Molina y se alía con el bando de Coscuez obteniendo como resultado la muerte de Molina.

Tras la muerte de Molina, Víctor Carranza toma el mando y comienza a promover la paz cuando el ejército asesina a Rodríguez Gacha. En 1990, se firman los acuerdos de paz (ver anexos acuerdos de paz) que ponen fin a la guerra verde teniendo a la iglesia como garante del proceso, cabe mencionar que no hubo ningún acompañamiento por parte del Estado colombiano quien no tuvo interés alguno en ser garante y mediador del proceso de paz. Pero la iglesia si tuvo un papel determinante porque logró mediar, ser garante y legitimar la paz entre estos dos bandos que se odiaban, consolidando el proceso sin que las partes lo abandonaran y haciendo razonar a los actores⁹. Para el padre Forero ese fue

⁹ El artículo de semana describe cómo los esmeralderos intentaron mejorar su imagen ante la opinión pública después de los acuerdos de paz. Semana (11 de noviembre de 1992) “ La reinserción de los esmeralderos”. Recuperado el 29 de octubre de 2014 del archivo de la revista semana. URL: <http://www.semana.com/nacion/articulo/la-reinsercion-de-los-esmeralderos/17376-3>

mayor mérito de la iglesia, quien fue la persona que le propuso a Luis Murcia Chaparro, alias “el pequinés”, que se comprometiera con la paz de la región. La respuesta del pequinés fue “estamos cansados de la guerra por los muertos y por movilidad.... El desgaste está en su máxima expresión”.

Actualmente, se han dado nuevos intentos por revivir la violencia en la región. Las familias esmeraldiferas ante la muerte de Víctor Carranza pretenden apoderarse del vacío de poder que dejó Carranza. El padre Abraham Gil Sierra señala que “la muerte de Carranza da espacios para que los rencores se revivan y para que se quiera más poder”. Los dos sacerdotes concuerdan en el sentido de que debe haber un mayor compromiso por parte de las autoridades judiciales para que los crímenes no queden en la impunidad, porque ese ha sido uno de los grandes problemas de la región, la enorme impunidad que existe en todos los procesos que se llevan para esclarecer los homicidios cometidos. Ante esta nueva realidad, resulta controvertible como no se han dado intentos del gobierno nacional por controlar la situación, creciendo los temores de que retorne la violencia a la región y como este control territorial ha incidido en las prácticas políticas y electorales de la región.

Capítulo 3. Evolución del sistema político.

El capítulo 3 busca hacer explícita la influencia y/o la incidencia que han tenido los esmeralderos en el sistema político de la región y las alianzas que afianzaron con políticos del nivel nacional desde los años 60 hasta tiempos recientes, resulta esencial evidenciar como ha sido la relación de mutua conveniencia entre estos dos actores y sus efectos sobre el sistema político local. El capítulo se dividirá de la siguiente manera: i) relaciones entre esmeralderos y políticos en los años 60, 70 y 80 ii) análisis de la competencia electoral en el occidente de Boyacá desde que se eligen alcaldes por vías democráticas iii) participación en política de las familias con más poder en la región.

3.1 Relaciones entre esmeralderos y políticos

3.1.1 Década del 60.

Desde las décadas del 60 y 70 comenzó a ser evidente la relación que empezó a surgir entre esmeralderos y políticos boyacenses que tenían un alcance nacional. La primera alianza entre estos dos actores se remonta a comienzos de los años 60 cuando Efraín Gonzales quien era amo y señor de la región con la aprobación de los jefes esmeralderos, tenía influencia y poder sobre algunos políticos conservadores que tenían un alto caudal electoral en la región. Señala Uribe (1992), que Efraín Gonzales tenían una estrecha relación con el senador Luis Torres Quintero quien en esa época era el presidente del Senado de la república y fue muy útil para los intereses de las familias esmeralderas ya que financiaron sus campañas políticas en diversas ocasiones. Fue tan estrecha la relación entre Efraín Gonzales y el senador Torres Quintero que en múltiples ocasiones lo defendió en el congreso de la república denominándolo como el “Robín Hood” de la región (Stain, 2006). Tal como lo señala Uribe (1992) “los senadores y los representantes a la cámara por la provincia de occidente son el enlace entre los patronos y algunas instancias estatales como el congreso, la cámara de representantes y algunas instituciones que tienen representación en la zona” (pp.101).

En esos mismos años, los senadores conservadores y los políticos regionales del mismo partido eran una ayuda esencial para los esmeralderos en su deseo primario de maximizar las utilidades de la explotación ilegal de las minas de esmeraldas. Estas alianzas con políticos conservadores se originaban en parte a un componente ideológico ya que la mayoría del occidente de Boyacá se encasillaba como perteneciente a ese partido político. Fueron excepcionales los casos en donde los políticos liberales tuvieron incidencia en la región. El caso más reconocido fue el de Carlos Bernal, bandido liberal de la época de la violencia, que tuvo cierta influencia en esta región y fue uno de los mayores enemigos de Efraín

Gonzales. A este personaje se le asocia con Juvenal Castillo Rincón, en ese entonces alcalde Chiquinquirá, y su líder político Alejandro Cortes Santamaría (Claver, 2011). Pero Carlos Bernal no logró tener la suficiente influencia en la región por el enorme poder que había obtenido Efraín Gonzales quien obtuvo el apoyo de los esmeralderos y tenía plena libertad para tomar las medidas correctivas necesarias.

En esta década, se empezó a promover “un discurso regionalista que legitimaba la propiedad de la mina para los locales” (Stein, 2006: 250) el cual buscaba que la gente de la región obtuviera el control de las minas para poder explotarlas ya que era el derecho legítimo que tenían por ser oriundos de la región. Fue así como los vínculos entre elites regiones y políticos se empezaron a consolidar porque estos políticos eran los voceros perfectos para validar estas demandas ante el Estado nacional.

3.1.2 Década del 70

Como ya se mencionó en el capítulo 2, a finales de los años 60, las mafias esmeralderas tenían como pretensión principal legalizar sus fortunas que hasta ese momento eran ilegales y convertirse en los dueños de las minas de esmeraldas. Para cumplir este propósito, intentaron desarticular el banco de la república, y posteriormente, la entidad que creó el gobierno encargada de supervisar la explotación de la minas, Ecominas. Mediante sobornos, compra de funcionarios y otras estrategias no lograron su objetivo por la nula respuesta del gobierno de acceder a las demandas de los esmeralderos.

Ante el rechazo del gobierno de Carlos Lleras Restrepo, los esmeralderos deciden esperar a las elecciones de 1970 y financian las campañas de Gustavo Rojas Pinilla y Misael Pastrana; pero en la campaña de Pastrana deciden invertir una suma mayor con la promesa de que les sería adjudicadas las minas del occidente de Boyacá (Claver, 2011). Finalmente, Pastrana es elegido para el periodo de 1970-1974 y cumple su promesa de abrir en licitación la explotación de las minas.

Pero esta licitación era algo superficial porque el control de las minas caería en manos de los esmeralderos como retribución a sus aportes en la campaña presidencial. El anterior suceso histórico es un ejemplo específico de lo que Gibson (2006) denomina la “nacionalización de la influencia”, porque estas mafias esmeralderas lograron tener incidencia nacional en aras de afianzar y consolidar su poder local. Sin este aporte a la campaña presidencial, se hubiera imposibilitado temporalmente legalizar las fortunas y obtener la explotación de las minas. A raíz de la decisión del gobierno, los esmeralderos crean empresas legales para acceder a estos beneficios. Según Barón y Gutiérrez (2008), La resolución 337 de marzo de 1977 aprobaba los contratos entre Ecominas, la sociedad minera boyacense y la sociedad de esmeraldas y minas de Colombia (ESMERACOL) otorgándoles el control de las minas de la siguiente manera.

Tabla 5. Empresas que ganaron el control de las minas en los 80”

Empresa	Dueño	Mina
Tecminas	Gilberto Molina y Víctor Carranza	Quipama
Esmeracol	Pacho Vargas	Coscuez
Coexminas	Víctor Carranza	Peñas Blancas

Información tomada de Barón y Gutiérrez (2008). Elaboración propia

Los esmeralderos lograron obtener el control de las minas en parte a la ayuda que recibieron por parte de funcionarios estatales, entre ellos el ministro de minas de la época, Gerardo Silva Valderrama, quien se convirtió en el defensor de las familias porque aseguraba que cualquier persona podía licitar con el Estado (Claver, 2011). Y además, según este autor, el Estado adicionalmente permitió la creación de una guardia civil por parte de los esmeralderos con el fin de vigilar y controlar lo que sucedía en las minas. Este fue un enorme aporte del gobierno a los esmeralderos porque se desentendió de la seguridad de la región otorgándole la responsabilidad de controlar la seguridad a las mafias esmeralderas. A este fenómeno histórico que se dio en ese entonces, lo podríamos catalogar en términos de Gutiérrez (2012), como el primer síntoma claro de *privatización de la seguridad*, porque las elites

regionales tuvieron la facultad de controlar e imponer unas condiciones de seguridad en reemplazo de un gobierno y un Estado que cada estaba más alejado de las problemáticas sociales.

Se podría señalar esta situación de mutua conveniencia, porque ambos actores se vieron beneficiados por estas disposiciones gubernamentales, los esmeralderos lograron el control de las minas y el gobierno delegó la seguridad y el control de la región olvidando su obligación constitucional. Desde esa campaña presidencial, los aportes económicos a las campañas de los políticos por parte de los esmeralderos se convirtió en una tradición; un ejemplo evidente que será palpable más adelante fue la relación estrecha que construyó Víctor Carranza con algunos políticos relevantes a nivel nacional.

3.1.3 Década del 80

La década del 80 se caracteriza porque emergen los nuevos zares de las esmeraldas y con ellos se generan nuevas dinámicas de alianza entre los esmeralderos y la clase política del país. Los dos nuevos zares de la esmeralda son Gilberto Molina y Víctor Carranza quienes empezaron a tener gran poder tras la muerte de Isauro Murcia y por las diversas licitaciones que ganaron para obtener el control de las minas más importantes. En este fragmento del capítulo es necesario resaltar que no se pueden comparar las alianzas que tejó en estos años Víctor Carranza con las de Gilberto Molina. Carranza supo crear alianzas y amistades con los políticos importantes del país, a comparación de Molina quien a pesar de tener buenas relaciones políticas e importantes aliados no logró tener la incidencia de Carranza. Es por eso que es necesario describir las relaciones que entablaron de manera diferenciada.

Gilberto Molina en la década del 80 fue catalogado como el zar de las esmeraldas porque a raíz de la muerte de Isauro Murcia fue declarado el nuevo patrón de la región. Tuvo enorme poder y logró tener el control de los aparatos judiciales y policiacos de la zona. De igual manera, los políticos locales estaban a su

disposición, sus deseos eran directrices que se debían adoptar y hacer cumplir. Según Claver Téllez (2011), Gilberto Molina tenía una íntima amistad con Álvaro Leiva Duran, político conservador, a quien en múltiples ocasiones Molina le financió sus campañas políticas. Este control que tenía de la región facilitó que nadie se entrometiera en los asuntos del occidente de Boyacá; ni otras mafias, ni las autoridades estatales y muchos menos el ejército ni la policía quienes estuvieron a su plena disposición. El desenlace de la guerra verde permeó su poder. Y antes de que lo asesinaran, siempre tuvo la ayuda y complicidad de políticos conservadores a quienes Molina les ayudó económicamente.

El otro caso relevante es el de Víctor Carranza quien logró sobrevivir a todas las guerras en las que participó. Desde los años 70, empezó a tener influencia sobre políticos nacionales quienes con el paso de los años se convirtieron en grandes aliados y en personas que fueron útiles para los intereses que tenía Carranza de incrementar su poder. La consolidación de sus lazos de amistad con las familias más prestantes del país, se debe en parte a que nunca incomodó a estas elites y supo ser aliado de estas en momentos determinados. Esta manera de actuar generó una legitimidad por parte de las instituciones estatales para que él y las familias esmeralderas mantuvieran el control político, social y económico de la región. Fue así como supo rodearse del aparato estatal del país y más que aliados los convirtió en amigos que estaban dispuestos a ayudarlo en todo momento.

El primer indicio claro de la relación entre Carranza y políticos nacionales, fue hacia finales de los 60 cuando apoyó al senador Luis Mario Rivadeneira para la creación de Ecominas (Cepeda y Giraldo, 2012: 45). Cepeda y Giraldo (2012), muestran como el zar de las esmeraldas señala con normalidad las relaciones que ha tenido con políticos y personas influyentes en el ámbito político¹⁰. Señala que ha financiado a por los menos un candidato en cada una de las elecciones presidenciales, y que a todos los conoce personalmente (pp. 20). Es evidente,

¹⁰ Cepeda y Giraldo (2012) citan una entrevista que le realizó el periódico El Tiempo a Víctor Carranza, en la cual él señala los vínculos que ha tenido con la clase política del país.

como lo señala Barreto¹¹ (2013) que Víctor Carranza se convirtió en “el socio necesario y legítimo que las elites no vieron como enemigo, siempre se mantuvo por medio de alianzas en las zonas grises de la legalidad”.

Una de las estrategias más exitosas de Carranza, no solo era tener alianzas con los políticos, tenía enorme poder e influencia en el poder judicial. Es un rumor que durante toda su vida, Carranza pagó los estudios universitarios de muchos abogados que hicieron parte de las altas cortes y los tribunales, quienes después por gratitud hacia su mentor ejercían todo tipo de influencias para que ningún proceso en su contra tuviera éxito. Es así como Carranza muere en total impunidad teniendo uno de los expedientes judiciales más grandes del país.

El anterior recorrido por cada una de las décadas, permite dilucidar el enorme poder que han tenido las familias esmeralderas en el ámbito nacional. Como por medio de distintas estrategias lograron tener el apoyo de políticos que fueron herramientas útiles para obtener lo que deseaban: se les reconoció como empresarios legales; se les otorgó el control y la explotación de las minas; han apoyado y financiado la campaña política de candidatos presidenciales, y han podido mantener el control de la zona en todos los ámbitos sin que ningún gobierno les haya hecho oposición o les haya arrebatado ese privilegio. Todos los gobiernos bajo una legitimidad cómplice han permitido que estas elites sigan administrando el occidente de Boyacá como un territorio privado, desconociendo las necesidades de los habitantes y olvidándose por completo de las cosas que suceden en esa región.

3.2 Competencia electoral e influencia de las elites

Un factor relevante para analizar cómo ha sido el funcionamiento del sistema político del occidente de Boyacá es observar cómo ha sido la competencia electoral en la región desde que los alcaldes son elegidos mediante el voto

¹¹ Barreto escribe un interesante artículo cuestionando lo inquietante que es la manera como Víctor Carranza fue siempre de las elites políticas y de los entes judiciales.

popular. Por lo tanto, se analizan las elecciones de alcaldes entre los periodos de 1988 hasta 2011 en los 8 municipios que esta investigación tiene en cuenta. Para sistematizar la información electoral de estos municipios se utilizan 3 categorías de análisis que permiten dilucidar de una manera más adecuada la influencia que han tenido las elites esmeralderas en las elecciones municipales. La manera en la cual se hará la sistematización es la siguiente: como factor esencial se observará cual o cuales familias tienen el control de un municipio determinado, el conocimiento de esta información permitirá evidenciar i) donde hay presencia de mafias esmeralderas que ha pasado con la competencia electoral, ha sido cooptada o ha existido competencia electoral; ii) donde hay presencia de mafias esmeralderas observar si hay predominio electoral de algún partido iii) en los municipios donde no hay presencia o asentamiento de mafias esmeralderas como ha sido el comportamiento electoral.

La competencia electoral se clasificará en dos categorías de análisis que son una construcción propia: a) Elecciones disputadas y b) Elecciones no disputadas. Una elección será disputada cuando haya dos candidatos que se disputen las elecciones; o cuando haya más candidatos que no tienen un amplio margen en las votaciones. Las elecciones no disputadas se caracterizarán porque hay un candidato único; o hay más candidatos pero el candidato ganador supera al segundo en las elecciones con una diferencia porcentual del 20 %.

De igual manera, es necesario resaltar que estos comportamientos electorales no son lineales porque están expuestos a las dinámicas sociales y cambios en el sistema político. Es así que para sistematizar esta información de manera general, resulta esencial fijar unos periodos históricos para clarificar cuales han sido los cambios en las tendencias electorales que se han dado en la región. Se tienen como punto de referencia 3 periodos determinados: i) Entre 1988 y 1990, en este periodo comienza la elecciones de alcaldes popularmente y se está desarrollando aún la guerra verde; ii) después de la firma de los acuerdos de paz hasta el 2000; iii) Después de la reforma política de 2003 hasta 2011.

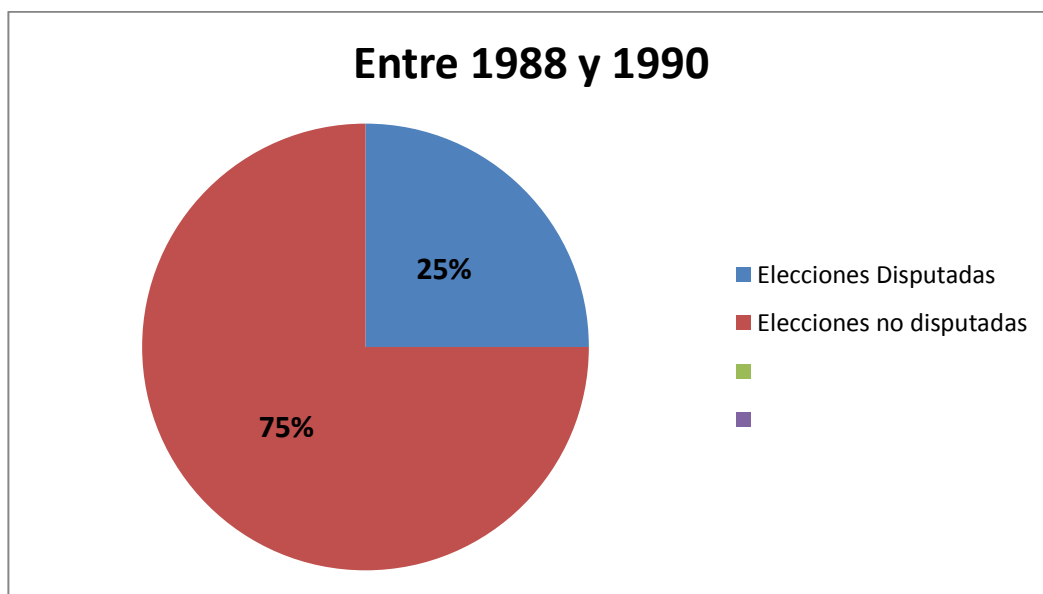
Para analizar la competencia electoral en los municipios del occidente de Boyacá, resulta esencial tener en cuenta una variable institucional que de cierta manera cambió los hábitos políticos de la región. La reforma política del 2003 generó que esta región boyacense dejará atrás el bipartidismo tradicional y que nuevos partidos políticos hicieran parte de las elecciones municipales. Pero este surgimiento de nuevas fuerzas políticas era solo en apariencia porque según el testimonio del ex trabajador entrevistado ningún político puede tener aspiraciones electorales en la región sin el consentimiento de los patrones de las esmeraldas. Ellos deciden quien entra o no en la zona y son los que legitiman el aval de los políticos. El argumento del entrevistado 3 se puede complementar con un testimonio que recoge Uribe (1992) en su texto para evidenciar que a pesar del transcurso de los años, las dinámicas político- electorales siguen siendo similares.

Según Uribe (1992), un concejal de Otanche afirmaba que los patrones son los que daban la orden de por quién votar; la gente puede abstenerse y no votar, pero no se puede hacer oposición. Esta idea se puede complementar con el testimonio que recoge de un representante a la cámara quien afirma “Nosotros somos los que hacemos la conexión entre el mundo de las esmeraldas y el Estado. Nosotros le hacemos las vueltas a los empresarios. El occidente está bajo el poder decisorio de los esmeralderos. Los políticos si quieren hacer política, tienen que estar de acuerdo con los patrones” (pp. 105)

3.2.1 Entre 1988 y 1990.

Durante este periodo histórico, hay 2 elecciones (1.988 y 1.990) para elegir los alcaldes municipales de los municipios. Es un periodo de tiempo que se caracteriza porque se está desarrollando la guerra verde la cual incide e influye en la competencia electoral de la región. El grafico 1 evidencia el porcentaje de elecciones que fueron disputadas y las que no fueron disputadas en este periodo de tiempo.

Grafico 1. % de elecciones disputadas y no disputadas entre 1988 y 1990



El grafico 1 denota que en este periodo de tiempo el occidente de Boyacá se caracterizó por tener elecciones no disputadas. De 16 elecciones que corresponden a 2 comicios electorales en 8 municipios de esta región, 12 elecciones fueron no disputadas y tan solo 4 fueron disputadas (Ver anexos tabla 17 y 18) Maripi (1988, 1990) y Coper (1988, 1990). Estos dos municipios fueron los únicos que tuvieron elecciones estables con una competencia electoral alta, siendo casos paradójicos teniendo en cuenta la situación que se vivía en esos años en el occidente de Boyacá donde la mayoría de municipios tenía una baja o nula competencia electoral producto de las dinámicas de la guerra. La tabla 1.6 señala cuantas de las 12 elecciones no disputadas tuvieron candidato único y en cuantas el candidato A supera al candidato B por una diferencia del 20 %.

Tabla 6. Elecciones no disputadas entre 1998 y 1990

Categoría	Año	Municipio	Nombre del que ganó	VOTACIÓN %
Candidato único	1988	Otanche	Gabriel Parra Benítez	98.92%
		Pauna	Joselin Casallas Lancheros	89.80 %
		Quipama	Marcos Elías Alarcón	99.91 %
		Borbur	Edgar Gonzales Espitia	94.10 %

Dos o más candidatos el ganador supera al segundo con más del 20 %	1990	Otanche	Luis Ernesto Moreno	99.66 %
		Pauna	Luis Villamil Lancheros	99.74 %
		Quipama	Carlos Diego Mendoza	99.50 %
		Borbur	Saúl Obando Parra	99.89 %
	1988	Briceño	Omar Ávila García	60.00%
		Muzo	Joaquín Suavita	70.27 %
	1990	Briceño	Ismael Rivera Páez	67.82 %
		Muzo	William Alfonso Nandar	71.99 %

De las 12 elecciones no disputadas, 8 elecciones tuvieron candidato único que equivale a un 66.6 %; en las restantes 4 elecciones que equivale al 33.3 % no hubo candidato único, Briceño (1988, 1990) y Muzo (1988, 1990) son los municipios en donde el candidato A supera al candidato B con una diferencia del 20 %. Es necesario resaltar que en estos dos años las dinámicas electorales no cambian en los municipios porque tienen el férreo control de las familias esmeralderas quienes imponen un candidato único. En los municipios donde había más de un candidato se daba la generalidad de que ambos tenían el aval de los esmeralderos.

Durante este periodo de tiempo transcurre la guerra verde que tiene a dos grupos enfrentados; estos mismos grupos y familias tienen el control territorial de los municipios lo que les daba el poder para utilizar estos territorios de la manera que deseaban. Estos grupos incidían en las elecciones de alcaldes porque necesitaban mantener bajo control al alcalde electo para que los intereses de estas familias se vieran maximizados. La tabla 1.7 evidencia como el bando de Coscuez (Murcia Chaparro, José Ruperto Córdoba, Pacho Vargas) y el bando de Borbur (Gilberto Molina, Victor Carranza, Lopez Gualteros, Slinas) se dividían el poder de los municipios en el occidente de Boyacá.

Tabla 7. Familias que ostentaban el poder entre 1988 y 1990

Entre 1988 y 1990								
Municipio	Briceño	Coper	Maripi	Muzo	Otanche	Pauna	Quipama	Borbur

Bando	Coscuez	Coscuez	Coscuez	Borbur	Borbur	Coscuez	Borbur	Borbur
--------------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	--------	--------

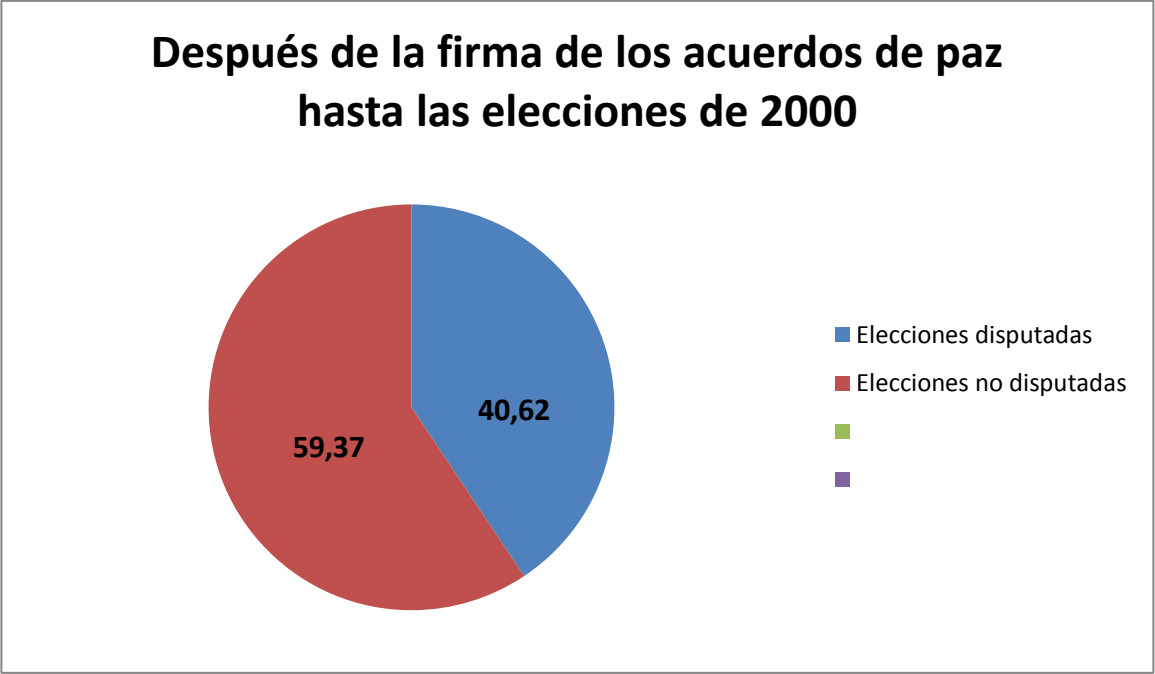
Los resultados electorales de este periodo de tiempo (ver anexos tabla 17 y 18) denotan que en los municipios donde el grupo de Coscuez tenía el control territorial hubo mayor competencia electoral, solo en Pauna el candidato vencedor obtuvo una cifra superior al 89 % de los votos. En los municipios donde el grupo de Borbur tenía el control no hubo ninguna competencia electoral, en Otanche, Quipama y San Pablo de Borbur los candidatos ganaron con un porcentaje por encima del 90 % de los votos en ambas elecciones. Esta evidencia confirma que necesitaban tener el control de los territorios para darle mayor legitimidad a su poder.

En cuanto al predominio electoral en la región, en estas elecciones se observa que es el partido conservador quien tiene en su poder la mayoría de alcaldías. De las 16 elecciones en este periodo de tiempo, en 14 se elige a un alcalde conservador y en solo 2 municipios (Coper, Quipama) en 1990 (Ver anexos tabla 17 y 18) se elige a un alcalde con el aval del otro partido.

3.2.2 Después de la firma de los acuerdos de paz de 1990 hasta el 2000.

Durante este periodo de tiempo se disputan 4 elecciones (1992, 1994, 1997, 2000) para elegir alcaldes municipales. Este periodo de tiempo se caracteriza por la firma de los acuerdos de paz, en la zona hay cierta estabilidad porque se reducen los índices de homicidios y las personas pueden recorrer tranquilamente los territorios del occidente de Boyacá. El grafico 2 señala el número de elecciones que fueron disputadas y las que no fueron disputadas durante estos comicios electorales.

Grafico 2. % de elecciones disputadas y no disputadas entre la firma de los acuerdos de paz hasta las elecciones de 2000



El grafico 2 denota que el porcentaje de elecciones no disputadas se reduce con respecto al periodo anterior. De las 32 elecciones disputadas, 19 fueron no disputadas que equivalen a un 59.37 %, mientras que las elecciones disputadas fueron 13 que representan el 40.62 % (Ver anexos tabla 19, 20, 21 y 22). Como se puede observar, con respecto al periodo anterior las elecciones no disputadas pasan de un 75 % a un 59.37 %. Estas cifras evidencian que la firma de los acuerdos de paz permitió un incremento de la competencia electoral en la región. A pesar de no ser un cambio significativo, se volvería una tendencia en la región la reducción de las elecciones no disputadas. La tabla 8 muestra cuántas de las 19 elecciones no disputadas tuvieron candidato único y en cuántas el candidato A superó al candidato B por una cifra del 20 %

Tabla 8 Elecciones no disputadas después de la paz verde hasta el 2000.

Categoría	Año	Municipio	Nombre del que ganó	Votación %
-----------	-----	-----------	---------------------	------------

Candidato único	1992	Muzo	Calos Germán Mahecha	90.89 %
		Otanche	Gabriel Parra Benítez	91.31 %
		Quipama	Manuel Enrique Melo	91.66 %
		Borbur	Fermín Delgadillo	85.35 %
	1994	Muzo	Omar Ernesto Manta	81.71 %
	1997	Briceño	Henry Alirio Wilchez	78.75%
		Pauna	Joselín Casallas Lancheros	75.23 %
		Quipama	Miguel Ernesto Espitia	69.67%
Dos o más candidatos, el ganador supera al segundo con más del 20 %	1992	Briceño	Pedro José Sarmiento	83.26%
	1994	Briceño	Henry Humberto León	77.27 %
		Maripi	Jorge Armando Quiñonez	66.38 %
		Otanche	Daniel Alfredo Ordoñez	73.47 %
		Quipama	Juan de Jesús Bustos	61.90 %
		Borbur	Carlos Hernando Obando	64.80 %
	1997*	Otanche	Luis Ernesto Moreno	88.28 %
		Muzo	William Alfonso Nandar	61.02 %
	2000	Otanche	Juan Alirio Galindo	61.10 %
		Pauna	Gustavo Heladio Torres	62.18 %
		Borbur	José Napoleón Bonilla	67.94 %

La tabla 8 revela que el número de elecciones no disputadas con candidato único se redujo, en el periodo anterior era de un 66.6 % que correspondían a 8 elecciones. En este periodo de tiempo se mantiene el mismo número de elecciones (8) con candidato único pero en un mayor número de elecciones (19) lo cual equivale al 42.1 % de las elecciones no disputadas. Es así, como la categoría de elecciones no disputadas donde el candidato A supera al candidato B por más del 20 %, presenta un incremento ya que 11 de las 19 elecciones no disputadas presenta esta característica que equivale al 57.8 %. Después de la firma de los acuerdos de paz que le ponen fin a la guerra verde, se da la particularidad que estos municipios empiezan a tener más candidatos que se postulan a las elecciones pero las elites siguen teniendo gran influencia en los comicios electorales.

A partir de este momento histórico, es necesario señalar cuáles son las familias que tienen el poder en cada uno de los municipios. De igual manera, en algunos municipios no se encontró la suficiente información para indicar si había familias con total predominio; este control generalmente se ejercía en los municipios donde había minas de esmeraldas con alto potencial para explotar. La tabla 1.9 señala el control territorial que tenían las familias en los municipios.

Tabla 9. Familias que ostentaban el poder entre los acuerdos de paz y el 2000

Después de la firma de los acuerdos de paz hasta el 2000					
Municipio	Maripí	Muzo	Pauna	Quipama	Borbur
Familia	Triana, Diosdó González	Carranza	Rincón, Salinas, Triana y Diosdó González	Molina	Murcia Chaparro, Obando

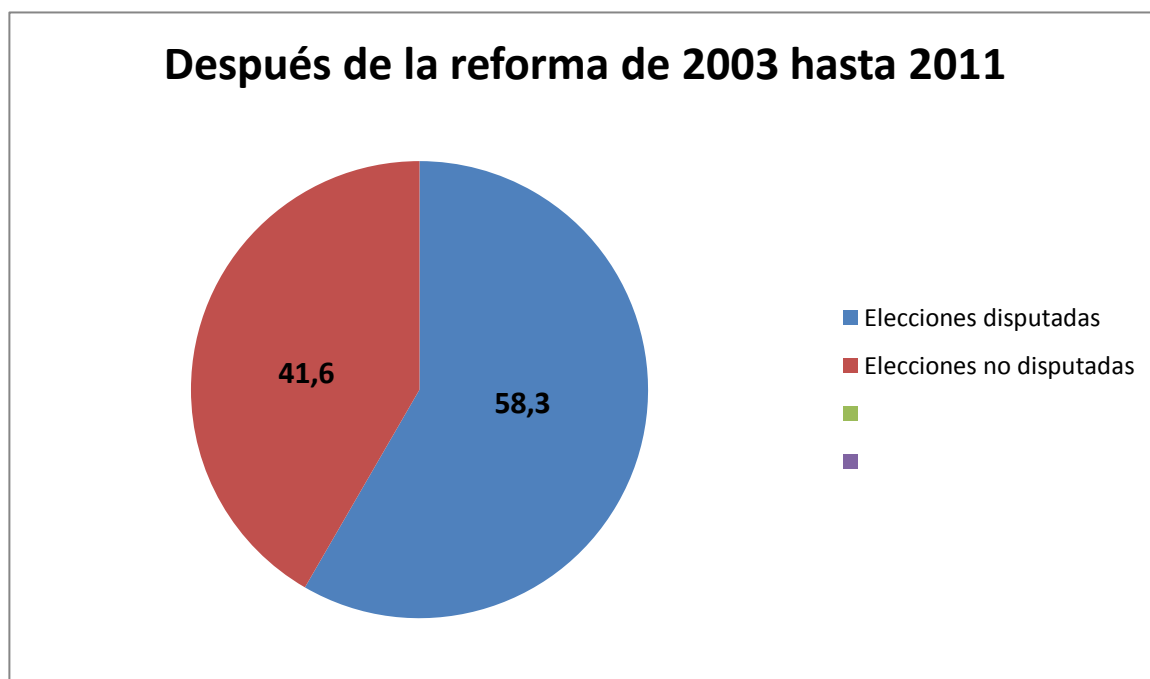
Como se observa en la tabla 9, en 5 de los 8 municipios había mínimo una familia que ostentaba el poder. Muchas de estas familias se consolidaron en el poder después de la paz verde y otras emergieron como nuevos poderes en la zona. Los municipios donde estas familias tienen el control son lo que menos índices de competencia electoral tienen, a pesar de que el número de candidatos se fue incrementando el candidato ganador se imponía con facilidad en los comicios electorales.

En cuanto al predominio electoral de un partido, el partido conservador en este periodo seguía teniendo una superioridad electoral notable. De los 32 alcaldes que hubo en este periodo de tiempo, 25 eran del partido conservador lo que equivale al 78.1 %; otros partidos como el liberal y movimientos creados por políticos obtuvieron 7 alcaldías que representan el 21.87 %. Evidentemente, el partido tenía una hegemonía en esta región que con el transcurso de los años fue perdiendo

3.2.3 Después de la reforma de 2003 hasta el 2011

En este periodo de tiempo se disputan 3 elecciones (2003, 2007, 2011) para elegir alcaldes en los municipios de occidente de Boyacá. En el 2003, se crea la reforma política que cambió las dinámicas electorales y creó un sistema político multipartidista a nivel nacional. Teniendo en cuenta la influencia del contexto nacional en las elecciones locales, el grafico 3 denota si las elecciones en estos periodos electorales fueron disputadas o no disputadas

Grafico 3. % de elecciones disputadas y no disputadas después de la reforma de 2003 hasta 2011



El grafico 3 demuestra que la competencia electoral en el occidente de Boyacá se incrementó considerablemente. En el periodo anterior el porcentaje de elecciones no disputadas era 59.37 %, en este periodo histórico el 41.6 % fueron elecciones no disputadas lo que equivale a 10 de 24 elecciones totales (Ver anexos 23, 24, 25). En ese orden de ideas, las elecciones disputadas se convierten en una

constante en los municipios del occidente de Boyacá. Un ejemplo notorio es que en las elecciones de 2007 solo hubo un municipio (Briceño) que no tuvo elecciones disputadas; en contraste a esto, en el 2011 se reducen las elecciones disputadas porque solo 3 de los 8 municipios tienen una alta competencia electoral. La tabla 1.10 muestra cuántas de las 10 elecciones no disputadas tuvieron candidato único y en cuántas de estas elecciones el candidato ganador superó a su más cercano perseguidor con más del 20 % de los votos totales.

Tabla 10. Elecciones no disputadas entre la reforma de 2003 y 2011

Categoría	Año	Municipio	Nombre del que ganó	Votación %
Candidato único	2003	Maripi	Libardo Castro Quiñonez	78.7 %
Dos o más candidatos, el candidato ganador supera al segundo con más del 20 %	2003	Briceño	Pedro Isaías Quesada	63.2%
		Pauna	Jorge Alirio Murcia	59.43 %
		Quipama	Néstor Alberto Rojas	50.44 %
	2007	Briceño	Fermin Cubides Acosta	70.13 %
	2007	Briceño	Edgar Parra	58.06 %
		Coper	Ricardo Valbuena Moreno	58.67 %
		Muzo	Luis Carlos Salazar	69.39 %
		Otanche	Wilson Guerrero Vázquez	53.74 %
		Quipama	Edgar Hernán Morón	59.43 %

La tabla 10 evidencia que las elecciones no disputadas con candidato único es casi nula, solo hay un municipio (Maripi) en el 2003 que tuvo candidato único lo que equivale al 10 % de elecciones no disputadas. En este periodo histórico se revierte la práctica histórica que tenían estos municipios hace dos décadas de presentar

candidato único, pero continua con la tendencia del anterior periodo donde se redujo considerablemente las elecciones con candidato único. Es significativo observar como en el 2011, hay una alta tendencia a no tener elecciones disputadas, los municipios tuvieron elecciones donde se impuso un candidato por un alto margen de votos. Se convierte en una generalidad que en la mayoría de municipios se postularan entre 3 o más candidatos a las elecciones. De esa manera, las elites permitieron que más candidatos participaran en las elecciones pero ellos tenían que avalarlos permitiéndoles entrar en la región y hacer política en ella. Asimismo, surgen cambios en la repartición del poder en la región porque algunos municipios tendrían a familias controlando, decidiendo y ejerciendo el control en estos municipios. La tabla 1.11 muestra cuáles familias mantienen el poder en los municipios.

Tabla 11. Familias que ostentan el poder en los municipios después de la reforma de 2003 hasta 2011

Después de la reforma política de 2003 hasta el 2011					
Municipio	Maripí	Muzo	Pauna	Quipama	Borbur
Familia	Rincón, Triana, Diosdó Gonzales	Carranza, Molina, Enrique Díaz, Darío Campos Samudio	Rincón, Lancheros	Molina, Darío Campos Samudio	Murcia Chaparro, Barrera, Cañón

Como se puede observar en la tabla 11, el control en los municipios lo seguían manteniendo las mismas familias tradicionales con la inclusión de nuevos actores que alcanzaron el poder en detrimento de otras. Es el caso de Enrique Díaz y Darío Campos en Muzo; la Familia Barrera en San Pablo de Borbur; la familia Lancheros en Pauna. En cuanto al predominio electoral de un partido, este periodo histórico se caracteriza por tener un sistema político multipartidista donde ningún partido tiene hegemonía y por el declive del partido conservador que ya no impone mayorías electorales

3.3 Participación en política de familias con poder.

El sistema político de los municipios del occidente de Boyacá ha tenido la tendencia de que las familias tradicionales participen en política, bien sea en los concejos municipales o compitiendo en las elecciones para alcalde. Ha sido una tradición que han mantenido durante décadas. La tabla 12 evidencia la participación en política de algunas familias tradicionales de la región.

Tabla 12 Participación en política de algunas familias tradicionales.

Familia Rincón	Familia Triana	Familia Lancheros	Familia Obando	Familia Murcia
Pedro Nel Rincón- Concejal de Pauna en el 2007	Horacio de Jesús Triana- Concejal de Maripi en el 2000, 2007 y 2011	Joselin Casallas Lancheros- Alcalde de Pauna en 1988 y en 1997	Saúl Obando Parra- alcalde de San Pablo de Borbur en 1990	Jorge Alirio Murcia- Alcalde de Pauna en 2003
Ana Mercedes Salazar- Esposa de Pedro Rincón, concejal de Pauna actualmente	Segismundo Triana- Concejal de Maripi en 1997	Luis Villamil Lancheros- Alcalde de Pauna en 1990	Carlos Hernando Obando- Alcalde de San Pablo de Borbur en 1994	Wilson Javier Murcia- Es concejal actualmente de San Pablo de Borbur
Ricardo Castro Rincón- alcalde de Maripi en el 2003		Libia Mariela Lancheros- Alcalde de San Pablo de Borbur en 2011	Bernabé Obando Marín- Concejal 2 veces (1997, 2000) de San Pablo de Borbur y candidato a la alcaldía del mismo municipio en 2003	Blanca Herlinda Ramírez Murcia- Concejal de San Pablo de Borbur en 1997
Gilberto Rincón- concejal de Maripi en el 1997, 2011		Luis Alberto Lancheros- Concejal en Pauna 1997		Hilda Consuelo Murcia Rincón- Concejal de Coper en 1997 y en el

				2000
Salvador Rincón - concejal de Maripi en el 2000				
José Rafael Rincón - alcalde de Coper en 1990 ¹²				

En la tabla 12 se puede evidenciar la manera en que las principales familias enfocan su estrategia de control territorial y político en determinados municipios. La familia Rincón ha buscado tener influencia en dos municipios, Maripi y Pauna; la familia Triana en Pauna, teniendo representación en casi todos los periodos a excepción de 2003; la familia Lancheros en la década del 90 tuvieron una importante representación en la alcaldía municipal de Pauna; la familia Obando ha tenido gran importancia e influencia en el municipio de San Pablo de Borbur, y la familia Murcia es la única que ha tenido control en distintos municipios. Entre estas familias se crea una legitimidad y un respeto para no intervenir en los asuntos de las otras familias, estas dinámicas han permitido que se perpetúe el poder de estas familias ya que no tienen ninguna oposición local ni nacional.

Conclusiones y recomendaciones

- El occidente de Boyacá ha estado inmerso en unas dinámicas en las cuales unos actores privados se han apoderado de los recursos públicos; generando que en esta región no se consolide el desarrollo y siga sumida en la pobreza. Los índices de NBI denotan las precariedades en las cuales viven las personas de esta región. La falta de políticas públicas y una

¹² Además de la información suministrada por el ex trabajador, esta información se complementó con archivos de prensas de El Tiempo, El Espectador, Boyacá 7 días y Revista Semana los cuales permitían saber cuáles concejales hacían parte de las familias más importantes de la región

ineficiente cobertura de servicios públicos hacen evidente la paradoja del occidente de Boyacá, una región inmensamente rica en recursos pero una población que ha sido condenada a la pobreza.

- Esta situación social y económica en la región se ha prolongado durante décadas, las familias tradicionales han logrado perpetuar su poder generación tras generación sin que hayan vientos de cambio. Así como han muerto en distintas guerras o por causas naturales los patrones de las esmeraldas, sus hijos, familias y personas cercanas han llegado a ocupar el lugar de mando y han logrado perpetuar ese poder autoritario en la región y en los municipios.
- Una alta responsabilidad histórica tiene el Estado colombiano porque permitió que estas familias adquirieran el poder y consolidaran el control de la zona durante décadas. Desde 1983, cuando adjudicó el control de las minas a estas familias permitiéndoles legalizar su fortuna, el gobierno se desentendió de las dinámicas regionales. La ausencia estatal es evidente cuando asintió: la creación de guardias civiles encargadas de vigilar las minas; se ausentó del proceso que produjo la firma de la paz verde; permitió que personajes como Víctor Carranza murieran impunemente teniendo uno de los prontuarios delictivos más grandes del país; no ha intervenido en la ejecución de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de estas personas.
- Esta ausencia estatal no ha sido por falta de capacidad para suplir las necesidades de estos habitantes. Desde los años 60, las personas más importantes de la región han tenido vínculos con políticos de alcance nacional. Se podría catalogar esta relación de mutua conveniencia ya que los políticos han estado al servicio de estas personas a cambio de financiación de las campañas políticas. Fue esta relación entre estos dos actores la que permitió que se adjudicaran las minas a estos personajes y logaran legalizar sus fortunas. De esta manera, no se podría hablar de la consolidación de un poder local sin tener influencia en lo nacional.

- Las dinámicas electorales de la región han variado dependiendo del periodo histórico en que se hayan desarrollado los comicios electorales. Hay un primero periodo que se da entre 1988 y 1990, en el cual en los municipios había candidato único y se imponía con más del 90 % de los votos; un segundo periodo que transcurre entre la firma de los acuerdos de paz hasta el 2003, donde hay un mayor número de candidatos pero se sigue presentando un gran número de elecciones disputadas; y un tercer periodo, después de la reforma política del 2003, en el cual hay una multiplicidad de candidatos en cada uno de los municipios donde hay una activa competencia electoral, las familias tradicionales ya no imponen al ganador pero cada uno de los candidatos tiene que tener el aval de ellos para competir en las elecciones.
- La alcaldía y los concejos municipales han estado expuestos a la influencia de estas elites quienes han controlado estos espacios políticos. La información obtenida permite deducir que estos escenarios están controlados y que gran parte de los alcaldes y concejales llegan como cuota de estas elites y no tienen libertad para tomar determinaciones porque deben tener la aprobación de sus jefes políticos..
- Es necesario revertir la deuda histórica que se tiene con el occidente de Boyacá. El Estado debe regresar a la zona y cumplir con las obligaciones que tiene para que no se siga prolongando la exclusión y la miseria en la región. Es injustificable que una región con tantos recursos económicos, tenga una población tan pobre y un atraso social tan arraigado. Es indispensable que el Estado regrese a la región para que evite repetir los errores del pasado y se reactive una nueva guerra verde entre las familias, quienes al no tener ningún control en la región tienen la facilidad de crear guerras, de asesinar y seguir siendo empresarios legales.
- Resulta esencial en aras de consolidar la paz en la región que se reduzcan los niveles de impunidad que hay en la región. De los innumerables asesinatos que ha habido en la región, solo unos pocos han sido

judicializados y han tenido una condena. El juez Villamil señalaba que la impunidad era una de las grandes problemáticas de la región. Mencionaba que de las víctimas de la guerra verde, prácticamente no hubo condenas y que los familiares de las víctimas no sabían quién los había asesinado.

Bibliografía

- Balan, Pablo (2013). “Autoritarismo subnacional: clasificación, causas, teoría”. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- Cepeda, Iván & Giraldo, Javier (2012) “Víctor Carranza, alias el “Patrón”. Grijalbo, Colombia.
- Claver, Pedro (2011) “Verde, la historia secreta de la guerra entre los esmeralderos”. Intermedio Editores. Bogotá
- Dávila, Andrés & Leal, Francisco J. (1990) “Clientelismo, el sistema político y su expresión regional”. Universidad Nacional, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Bogotá.
- Easton, David (1979) “Esquemas para el análisis político”. Amorrotu, Buenos Aires.
- Gutiérrez, Francisco (2006) “¿Lo que el viento se llevó? Los partidos políticos y la democracia colombiana (1958- 2002)”. Grupo Editorial Norma, Bogotá.
- Laborie, Mario (2012) “La privatización de la seguridad: Las empresas militares y de seguridad privadas en el entorno estratégico actual”. Instituto Español de Estudios Estratégicos (ieee.es), España.
- Rebolledo, Juan (2011) “Voting with the enemy. Democratic support for Subnational Authoritarians”. Yale University
- Rokkan, Stein (1983). “Economy, Territory, Identity: Politics of West
- Snyder, Craig (2008) “Regional security and regional conflict”. Contemporary security and strategy. New York.
- Uribe, Maria V. (1992) “Limpiar la tierra: guerra y poder entre esmeralderos”. Cinep, Bogotá.

Artículos académicos en línea

- Barreto, Juan Manuel (2013) “¿El crimen si paga? La historia del intocable, indispensable y enigmático Víctor Carranza” Coyuntura política colombiana. Recuperado de: <http://politicacolombiana2013.wordpress.com/2013/05/07/el-crimen-paga-la-historia-del-intocable-indispensable-y-enigmatico-victor-carranza/>
- Corporación Nuevo Arco Iris (2011) “Mafias y agentes ilegales buscan rentas y poder local”. Observatorio del conflicto armado, Riesgos electorales 2011. Recuperado de: <http://alfresco.uclouvain.be/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f64732f4-31b5-474a-8925-18fec4747cc/CNAI%20-mafias%20y%20poder%20local%202011.pdf>
- Duque, Javier (2006) “Los partidos políticos colombianos 1974- 2006: Subinstitucionalización de los partidos tradicionales y emergencia de organizaciones políticas alternativas”. Red de bibliotecas virtuales de ciencias sociales de Ciencias Sociales de la red CLACSO. Recuperado de: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/semi/2004/partidos/duque.pdf>
- Gibson, Edward (2006) “Autoritarismo subnacional: estrategias territoriales de control político en regímenes democráticos”. Revista desafíos, Universidad del Rosario. Vol. 58. pp. 203- 237. Recuperado de: <http://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/article/view/741/668>
- Gonzales, Fernán (2003) “¿Colapso parcial o presencia diferenciada del Estado en Colombia? “ Colombia Internacional, Universidad de los Andes. Revista n. 58. pp. 124-157. Recuperado de: <http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/422/view.php>
- Gutiérrez, Francisco (2012) “Una relación especial: privatización de la seguridad, elites vulnerables y sistema político (1982-2002)” Estudios

socio- jurídicos. Vol. 14, n. 1. Recuperado de:
<file:///C:/Users/IVAN/Downloads/1938-7193-1-PB.pdf>

- Gutiérrez, Francisco (2007) “Participación y pobreza en Colombia”. Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad (MERPD). Recuperado de:
[file:///C:/Users/IVAN/Downloads/6.%20Gutierrez%20participacion%20ciudadana%20y%20pobreza%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/IVAN/Downloads/6.%20Gutierrez%20participacion%20ciudadana%20y%20pobreza%20(3).pdf)
- Gutiérrez, Francisco & Acuña, Fabián (2010) “El indefinido nuevo sistema de partidos en Colombia”. Instituto de estudios América Latina y el Caribe, observatorio latinoamericano 5. Recuperado de:
<file:///C:/Users/Ivan/Downloads/30El%20indefinido%20nuevo%20sistema%20de%20partidos%20en%20Colombia.pdf>
- Gutiérrez Francisco & Barón, Mauricio (2008) “Ordenes subsidiarios. Coca, esmeraldas: la guerra y la paz”. Colombia internacional, Universidad de los Andes. Revista N. 67. pp. 102-129. Recuperado de:
<http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/309/index.php?id=309>
- Ortiz, Antonio (1986) “El concepto de sistema político en la obra de David Easton”. Sociológica, revista del departamento de sociología. Vol: Año 1, n. 2. Recuperado de: <http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/0209.pdf>
- Rubio, Mauricio (1997) “Los costos de la violencia en Colombia” Centro de Estudio sobre Desarrollo Económico. Recuperado de:
<http://pdba.georgetown.edu/Security/citizenssecurity/Colombia/evaluaciones/costosviolencia.pdf>
- Steiner, Claudia (2006) “Un bandolero para el recuerdo: Efraín González también conocido como el “siete colores”. Antípoda, Universidad de los Andes. Revista n. 2. pp. 229-252. Recuperado de:
file:///C:/Users/IVAN/Downloads/-data-Revista_No_02-15_diseminaciones4.pdf

- Velásquez, Fabio (2011) “La institucionalización de la participación en Colombia: Notas para su interpretación”. Revista de sociología política, Universidad federal de Santa Catarina. Vol. 10, n. 18. Recuperado de: [file:///C:/Users/IVAN/Downloads/7.%20velasquez%20ins%20de%20la%20participacion%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/IVAN/Downloads/7.%20velasquez%20ins%20de%20la%20participacion%20(1).pdf)

Entrevistas

- Entrevista a Monseñor Juan Norberto Forero (2014, 30 de Agosto)
Entrevistado por Heredia J.I & Hernández J., Chiquinquirá, Boyacá.
- Entrevista al sacerdote Abraham Gil Sierra (2014, 6 de Septiembre)
Entrevistado por Heredia J.I & Hernández J., Sutamarchán, Boyacá
- Entrevista a Antonio José Villamil (2014, 6 de Septiembre) Entrevistado por Heredia J.I & Hernández J., Sutamarchán, Boyacá
- Entrevista a Maria Florinda Castillo (2014, 6 de Septiembre)
Entrevistado por Heredia J.I & Hernández J., Sutamarchán, Boyacá
- Entrevista a ex trabajador de Tecminas (28 y 29 de Septiembre).
Entrevistado por Heredia J.I., Bogotá D.C

Prensa

- Periodo El Tiempo
- El Espectador
- Revista Semana
- Portafolio
- Boyacá 7 días
- El universal

Anexos

1. Preguntas entrevistas a sacerdotes

- Nombre
- ¿Cuál fue la motivación de ser sacerdote? ¿Cuánto tiempo lleva de ser ordenado?, Qué buenas experiencias le ha dado su profesión?
- ¿En qué otras zonas ha oficiado?, ¿Cuánto tiempo lleva en la zona?, ¿Su jurisdicción cobija otros municipios?
- Entendemos que la iglesia está comprometida con el trabajo social y con las comunidades, qué proyectos ha logrado desarrollar en la zona y la comunidad?
- ¿Cuál es su percepción acerca de la situación social y económica del occidente de Boyacá?
- Buena parte de la economía de la región está basada en la extracción y comercio de esmeraldas, en años anteriores si dieron conflictos entre diferentes grupos por este factor, ¿En qué consistió esta violencia? Y cuál fue el papel de la iglesia en lo que se denominó “la paz verde”
- Y cuál es el balance 25 años después de la firma de esos acuerdos, en la actualidad
- Sabemos que ante el abandono estatal que ha sufrido la provincia de occidente durante décadas, la iglesia y las familias esmeralderas han reemplazado las funciones del Estado. ¿Qué tanto han contribuido la economía esmeraldífera estas familias para el desarrollo social de la región?
- Sabemos que Víctor Carranza fue una de las personas más influyentes de la región,¿Cuál ha sido el impacto de su muerte?
- Recientemente la prensa registró (la muerte del hijo de Pedro Nel Rincón, - Pedro Orejas- y se prendieron las alarmas sobre nuevos brotes de violencia.Cuál es su percepción sobre el hecho?, considera que la zona perdió el equilibrio que había perdurado después de los acuerdos?

- La clase política local, tiene alguna relación con la economía esmeraldífera?

Tabla 13. Proyecciones de población (1985 -2020)

	1985	2005
Briceño	3.503	2.506
Coper	5.693	3.405
Maripi	8.963	7.251
Muzo	12.117	8.4291
Otanche	7.359	10.701
Pauna	11.186	10.826
Quipama	10.981	7.376
San Pablo de Borbur	7.593	10.285

Ver tabla 14 datos tomados del DANE. Elaboración propia

Tabla 15. Recursos de compensación. Municipios del departamento de Boyacá, decreto 745 del abril de 2014

Boyacá	16.776.683.723	%
Briceño	50.957.865	0.30
Coper	48.329.121	0.29
Maripi	101.429.624	0.60
Muzo	116.069.365	0.69
Otanche	100.749.763	0.60
Pauna	100.419.457	0.60
Quipama	126.038.275	0.75
San Pablo de Borbur	118.196.745	0.70

Tabla 15. Datos tomados del informe de seguimiento en tiempo real a los recursos del sistema general de regalías, del fondo de desarrollo regional al rubro de asistencias directas. Elaboración propia.

Tabla 16. Indicadores socioeconómicos municipios de occidente de Boyacá

Indicadores socio- económicos del occidente de Boyacá						
	Necesidades Básicas Insatisfechas-NBI (2010)	Tasa de Analfabetismo	Tasa de Asistencia Escolar de niños de 11 a 17 años	Tasa de Homicidios (100.000 Habitantes)-2009	Cobertura total de Acueducto	Déficit de vivienda
Briceño	35,02	13,2	65,6	74	57,6	52,01
Coper	47,03	19,7	51,4	0	40,5	72,2
Maripi	47,63	20,6	57,2	39	29,6	72,2
Muzo	45,67	15,1	73,7	10	48,6	67,64
Otanche	50,66	15,6	64,7	0	38,9	70,76
Pauna	61,74	22,6	60,1	0	38,5	70,76
Quipama	53,78	18,3	70,1	0	25	79,38
Borbur	46,72	17,4	61,3	0	32,35	78,1

Tabla 22. Con datos tomados de información geográfica para la planeación y el ordenamiento territorial (SIGOT).
Elaboración propia

Tabla 17. Elecciones alcalde de 1988 en el occidente de Boyacá

Fuente. Elaboración propia con datos de los libros de la registraduría

Elecciones 1988							
Año	Cargo	Municipio	Nombre	Partido	Votación total	Votación candidato	%
1988	Alcalde	Briceño	Omar Ávila García	Conservador	1075	645	60.00
1988	Alcalde	Coper	Jorge Ahumada Mocoso	Conservador	1.794	929	51.78
1988	Alcalde	Maripi	Alonso de Jesús Rocha	Conservador	2.191	1.193	54.45
1988	Alcalde	Muzo	Joaquín Suavita Armero	Conservador	3.367	2.366	70.27
1988	Alcalde	Otanche	Gabriel Parra Benítez	Conservador	1.116	1.104	98.92
1988	Alcalde	Pauna	Joselín Casallas Lancheros	Conservador	2.039	1.831	89.80
1988	Alcalde	Quipama	Marco Elías Alarcón	Conservador	2.210	2.208	99.91
1988	Alcalde	Borbur	Edgar Gonzales Espitia	Conservador	814	766	94.10

Tabla 18. Elecciones alcalde de 1990 en el occidente de Boyacá

Fuente. Elaboración propia con datos de los libros de la registraduría

Elecciones 1990						
Año	Cargo	Municipio	Nombre	Partido	Votación total	Votación candidato
1990	Alcalde	Briceño	Ismael Rivera Páez	Conservador	920	624
1990	Alcalde	Coper	José Rafael Rincón	Liberal	1.467	830
1990	Alcalde	Maripi	Eccehomo Lara	Conservador	2.731	1.389
1990	Alcalde	Muzo	William Alfonso Nandar	Conservador	1.739	1.252
1990	Alcalde	Otanche	Luis Ernesto Moreno	Conservador	1.206	1.202
1990	Alcalde	Pauna	Luis Villamil Lancheros	Conservador	1.967	1.962
1990	Alcalde	Quipama	Carlos Diego Mendoza	Otros partidos	3.220	3.204
1990	Alcalde	Borbur	Saúl Obando Parra	Conservador	994	993

Tabla 19. Elecciones alcalde de 1992 en el occidente de Boyacá

Fuente. Elaboración propia con datos de los libros de la registraduría

Elecciones 1992							
Año	Cargo	Municipio	Nombre	Partido	Votación total	Votación candidato	%
1992	Alcalde	Briceño	Pedro José Sarmiento	Conservador	705	587	83.26
1992	Alcalde	Coper	Tirso Alfonso Gonzales	Conservador	1.545	857	55.46
1992	Alcalde	Maripi	Gustavo Hernando Arévalo	Liberal	3.049	1.390	45.58
1992	Alcalde	Muzo	Carlos German Mahecha	Otros partidos	1.376	1.250	90.89
1992	Alcalde	Otanche	Gabriel Parra Benítez	Conservador	1.174	1.072	91.31
1992	Alcalde	Pauna	Gilberto Ortiz	Conservador	3.238	1.796	54.84
1992	Alcalde	Quipama	Manuel Enrique Melo	Conservador	2.964	2.717	91.66
1992	Alcalde	Borbur	Fermín Delgadillo	Conservador	1.188	1.014	85.35

Tabla 20. Elecciones alcalde de 1994 en el occidente de Boyacá

Fuente. Elaboración propia con datos de la registraduría

Elecciones 1994							
Año	Cargo	Municipio	Nombre	Partido	Votación total	Votación candidato	%
1994	alcalde	Briceño	Henry Humberto León	Conservador	946	731	77.27

1994	alcalde	Coper	Manuel Horacio Castellán	Liberal	1.659	804	48.46
1994	alcalde	Maripi	Jorge Armando Quiñonez	Liberal	1.669	1.108	66.38
1994	alcalde	Muzo	Omar Ernesto Manta	Conservador	1.701	1.390	81.71
1994	alcalde	Otanche	Daniel Alfredo Ordoñez	Conservador	2.275	2.039	73.47
1994	alcalde	Pauna	Luis Gonzalo Núñez	Conservador	3.202	1.726	53.90
1994	alcalde	Quipama	Juan de Jesús Bustos	Conservador	2.710	1.678	61.90
1994	alcalde	Borbur	Carlos Hernando Obando	Conservador	2.330	1.510	64.80

Tabla 21. Elecciones alcalde de 1997 en el occidente de Boyacá

Fuente. Elaboración propia con datos de la registraduría

Elecciones 1997					
Año	Cargo	Municipio	Nombre	Partido	Votación ganador
1997	Alcalde	Briceño	Henry Alirio Wilches	Conservador	833
1997	Alcalde	Coper	Jairo Enrique Ahumada	Conservador	1139
1997	Alcalde	Coper	José Ambrosio Roncancio	Liberal	786
1997	Alcalde	Maripi	Jhon Néstor Solarte Rozo	Conservador	1221
1997	Alcalde	Maripi	Néstor Sánchez Sánchez	Conservador	2078
1997	Alcalde	Muzo	William Alfonso Nandar	Conservador	2367
1997	Alcalde	Muzo	José Danilo Pineda Campos	Movimiento Convergencia	1512
1997	Alcalde	Otanche	Gabriel Parra Benítez	Movimiento nacional	133
1997	Alcalde	Otanche	Luis Ernesto Moreno Molina	Partido conservador	2623
1997	Alcalde	Otanche	Nelly Elizabeth Buitrago	Partido conservador	197
1997	Alcalde	Pauna	Joselín Casallas Lancheros	Partido conservador	2558
1997	Alcalde	Quipama	Miguel Ernesto Espitia	Partido conservador	1537
1997	Alcalde	Borbur	Víctor Manuel Alvarado	Partido conservador	1357
1997	Alcalde	Borbur	José Napoleón Bonilla	Partido conservador	1347
1997	Alcalde	Borbur	Jaime Humberto Cortes	Partido conservador	761

Tabla 22. Elecciones alcalde de 2000 en el occidente de Boyacá

Fuente. Elaboración propia con datos de la registraduría

Elecciones 2000						
Año	Cargo	Municipio	Nombre	Partido	Votación total	Votación candidato
2000	Alcalde	Briceño	Luis Antonio Corredor	Partido conservador	1243	104

2000	Alcalde	Briceño	Leovigildo Pineda Murcia	Partido conservador	1243	462
2000	Alcalde	Briceño	Pedro Josué Sarmiento Ortiz	Partido conservador	1243	385
2000	Alcalde	Coper	Javier Cristóbal Rodríguez	Partido conservador	2111	972
2000	Alcalde	Coper	José Ambrosio Roncancio	Partido Liberal	2111	1097
2000	Alcalde	Maripi	Héctor Saúl Cortes Páez	Partido conservador	6753	3059
2000	Alcalde	Maripi	José Armando Quiñonez	Participación Común	6753	3408
2000	Alcalde	Muzo	Fulgencio Ariza Cristancho	Partido Liberal	3490	1476
2000	Alcalde	Muzo	Joaquín Suavita Armero	Partido conservador	3490	1734
2000	Alcalde	Otanche	Gabriel Parra Benítez	Movimiento nacional	3270	245
2000	Alcalde	Otanche	Ramiro Antonio Ortiz	Partido conservador	3270	890
2000	Alcalde	Otanche	Juan Alirio Galindo Espejo	Partido conservador	3270	1998
2000	Alcalde	Pauna	Omar Augusto Neiza	Partido conservador	3665	1174
2000	Alcalde	Pauna	Gilberto Ortiz	Partido conservador	3665	10
2000	Alcalde	Pauna	Gustavo Heladio Torres	Otros partidos	3665	2279
2000	Alcalde	Quipama	Juan de Jesús Bustos	Partido conservador	2889	1067
2000	Alcalde	Quipama	Cesar Palacios Pachón	Partido conservador	2889	1677
2000	Alcalde	San Pablo de Borbur	José Napoleón Bonilla	Partido conservador	3444	2340
2000	Alcalde	San Pablo de Borbur	Jorge Armando Espitia	Partido conservador	3444	903

Tabla 23. Elecciones alcalde de 2003 en el occidente de Boyacá

Fuente. Elaboración propia con datos de la registraduría

Elecciones 2003							
Año	Cargo	Municipio	Nombre	Partido	Votación total	Votación candidato	%
2003	Alcalde	Briceño	Pedro Isaías Quesada	Conservador	1.350	876	63.2
2003	Alcalde	Briceño	Omar Ávila García	Movimiento Equipo Colombia	1.350	467	33.69

2003	Alcalde	Coper	Javier Cristóbal Rodríguez	Movimiento Cívico Independiente	1.932	993	49.03
2003	Alcalde	Coper	José Rogelio Nieto	Partido Liberal	1.932	867	42.81
2003	Alcalde	Coper	Arquímedes Gonzales	Movimiento Equipo Colombia	1.932	62	3.06
2003	Alcalde	Maripi	Ricardo Castro Rincón	Partido Col siempre	4.094	3.593	78.7
2003	Alcalde	Muzo	José Danilo Pineda	Convergencia Ciudadana	4.269	1.871	40.91
2003	Alcalde	Muzo	Juan Ricardo Pérez	Movimiento Político Comunitario	4.269	1.646	35.99
2003	Alcalde	Muzo	Wilson Leonardo Murcia	Partido conservador	4.269	533	11.65
2003	Alcalde	Muzo	Mercedes Alieth Chaparro	Colombia Democrática	4.269	166	3.63
2003	Alcalde	Otanche	Ramiro Antonio Ortiz	Vamos Colombia	3.835	1.366	34.26
2003	Alcalde	Otanche	Luis Ernesto Moreno	Partido conservador	3.835	1.156	28.99
2003	Alcalde	Otanche	Pablo Enrique Murcia	Movimiento Político Comunitario	3.835	610	15.29
2003	Alcalde	Otanche	Inocencio Galindo Ramírez	Movimiento nacional	3.835	415	10.4
2003	Alcalde	Otanche	Aida Cecilia Bustos	Movimiento si Col	3.835	185	4.64
2003	Alcalde	Otanche	Víctor Galindo Robayo	Movimiento equipo Colombia	3.835	61	1.52
2003	Alcalde	Otanche	Álvaro Poveda Forero	Nuevo partido	3.835	12	0.3
2003	Alcalde	Pauna	Jorge Alirio Murcia	Conservador	3.860	2.403	59.43
2003	Alcalde	Pauna	Fermín Antonio Cañón	Movimiento Político Comunitario	3.860	1.439	35.59
2003	Alcalde	Quipama	Néstor Alberto Rojas	Moral	2.772	1.486	50.44
2003	Alcalde	Quipama	Agustín Ángel Cárdenas	Colombia Democrática	2.772	703	23.86
2003	Alcalde	Quipama	Idolfo Romero	Partido Liberal	2.772	356	12.08
2003	Alcalde	Quipama	José Ovelio Martin	Convergencia Ciudadana	2.772	198	6.72
2003	Alcalde	Borbur	Jorge Armando Espitia	Movimiento Conservatismo Independiente	3.857	1.496	36.05
2003	Alcalde	Borbur	Bernabé Obando Marín	Partido conservador	3.857	1.390	33.5

2003	Alcalde	Borbur	Celso Miguel Mendieta	Convergencia Ciudadana	3.857	515	12.41
2003	Alcalde	Borbur	Jaime Humberto Cortes	Colombia Democrática	3.857	395	9.52
2003	Alcalde	Borbur	Néstor Raúl Medina	Movimiento nacional	3.857	23	0.55

Tabla 24. Elecciones alcalde de 2007 en el occidente de Boyacá

Fuente. Elaboración propia con datos de la registraduría

Elecciones 2007							
Año	Cargo	Municipio	Nombre	Partido	Votación total	Votación candidato	%
2007	Alcalde	Briceño	Fermín Cubides Acosta	Conservador	1413	991	70.13
2007	Alcalde	Briceño	Betty Ortiz Mesa	Alas equipo Col	1.413	391	27.67
2007	Alcalde	Coper	Rogelio Nieto Molina	La U	2.311	1.144	49.50
2007	Alcalde	Coper	Gloria Aurora Silva	Partido Liberal	2.311	1.097	47.47
2007	Alcalde	Coper	Julio Cesar Estrada	Alas equipo Col	2.311	4	0.17
2007	Alcalde	Maripi	Sixto Albeiro Reyes	La U	4.462	2.309	51.75
2007	Alcalde	Maripi	Imer Yaridma Murcia	Cambio Radical	4.462	1.962	43.97
2007	Alcalde	Maripi	Pablo Antonio Espitia	Colombia Democrática	4.462	8	0.18
2007	Alcalde	Muzo	John Nelson Martínez	La U	4.359	1.550	35.56
2007	Alcalde	Muzo	Juan Carlos Castillo	Partido conservador	4.359	1.472	33.77
2007	Alcalde	Muzo	Juan Ricardo Pérez	Alas equipo Col	4.359	799	18.33
2007	Alcalde	Muzo	William Alfonso Nandar	Cambio Radical	4.359	226	5.18
2007	Alcalde	Otanche	Ernesto Moreno Molina	La U	4.391	2.286	52.06
2007	Alcalde	Otanche	Wilson Guerrero Vázquez	Partido conservador	4.391	1.938	44.14
2007	Alcalde	Pauna	Gustavo Heladio Torres	Alas equipo Col	4.134	2.001	48.40
2007	Alcalde	Pauna	Omar Casallas Sánchez	Partido conservador	4.134	1.501	36.31
2007	Alcalde	Pauna	Gloria Cecilia Neiza	Partido Verde	4.134	427	10.33
2007	Alcalde	Quipama	Cesar Palacios Pachón	La U	3.109	1.678	53.97
2007	Alcalde	Quipama	Edgar Hernán Morón	Partido conservador	3.109	1.311	42.17
2007	Alcalde	Borbur	Celso Miguel Mendieta	Cambio Radical	4.054	1.053	25.97

2007	Alcalde	Borbur	Jaqueline Peña Poveda	La U	4.054	795	19.61
2007	Alcalde	Borbur	Libia Mariela Lancheros	Convergencia Ciudadana	4.054	740	18.25
2007	Alcalde	Borbur	Víctor Manuel Alvarado	Alas equipo Col	4.054	447	11.03
2007	Alcalde	Borbur	Feliciano Hernández	Partido conservador	4.054	344	8.49
2007	Alcalde	Borbur	Saúl Obando Parra	Colombia Democrática	4.054	262	6.46
2007	Alcalde	Borbur	Siervo Antonio Ortiz	Partido Verde	4.054	147	3.63
2007	Alcalde	Borbur	Álvaro Gualteros	Mov Apertura Liberal	4.054	14	0.35

Tabla 25. Elecciones alcalde de 2011 en el occidente de Boyacá

Fuente. Elaboración propia con datos de la registraduría

Elecciones 2011							
Año	Cargo	Municipio	Nombre	Partido	Votación total	Votación candidato	%
2011	Alcalde	Briceño	Edgar Parra	Conservador	1.458	828	58.06
2011	Alcalde	Briceño	Pedro Isaías Quesada	Cambio Radical	1.458	525	37.02
2011	Alcalde	Briceño	Elmer Arfait Wilches	La U	1.458	65	4.55
2011	Alcalde	Coper	Ricardo Valbuena	Partido Verde	2.317	1.320	58.61
2011	Alcalde	Coper	Francisco León Marcelo	Conservador	2.317	606	26.90
2011	Alcalde	Coper	Numael Barrantes	La U	2.317	316	14.03
2011	Alcalde	Maripi	Imer Yaridma Murcia	Partido Verde	4.356	2.466	58.28
2011	Alcalde	Maripi	Albeiro Acosta Rendón	La U	4.356	1.752	41.40
2011	Alcalde	Muzo	Luis Carlos Salazar	Conservador	4.291	2.857	69.39
2011	Alcalde	Muzo	Elín José Bohórquez	Cambio Radical	4.291	1.109	26.93
2011	Alcalde	Muzo	Luis Alberto Galicia	La U	4.291	131	3.18
2011	Alcalde	Otanche	Wilson Guerrero	Conservador	4.146	2.153	53.74
2011	Alcalde	Otanche	Norbey Octavio Garavito	La U	4.146	1.062	26.51
2011	Alcalde	Otanche	Clinton Rene Sánchez	Partido Verde	4.146	403	10.05

2011	Alcalde	Otanche	Gabriel Parra Benítez	PIN	4.146	354	8.83
2011	Alcalde	Pauna	Omar Casallas Sánchez	La U	4.489	1.650	37.93
2011	Alcalde	Pauna	Julio Ramiro Pena	Cambio Radical	4.489	1.585	36.43
2011	Alcalde	Pauna	Eulices Augusto Caro	Partido conservador	4.489	1.101	25.31
2011	Alcalde	Quipama	Edgar Hernán Morón	Partido Verde	2.997	1.726	59.43
2011	Alcalde	Quipama	William Enrique Pereira	La U y Cambio Radical	2.997	1.100	37.87
2011	Alcalde	Quipama	Rober Nelson Pachón	Partido Conservador	2.997	63	2.16
2011	Alcalde	Borbur	Libia Mariela Lancheros	La U	3.615	1.768	50.68
2011	Alcalde	Borbur	Luis Armando Caldas	Partido conservador	3.615	1.182	33.88
2011	Alcalde	Borbur	Jaqueline Peña Poveda	Partido Verde	3.615	356	10.20
2011	Alcalde	Borbur	Arnulfo Gutiérrez	Alianza social	3.615	160	4.58